



**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Público General

Área de Derecho Penal

Curso 2017/2018

LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: REGULACIÓN, CONSTITUCIONALIDAD Y CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Sofía Conde Iglesias

Tutora: Ana Isabel García Alfaraz

Salamanca, Junio de 2018

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Público General

Área de Derecho Penal

**LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE
REVISABLE: REGULACIÓN,
CONSTITUCIONALIDAD Y CONTEXTO DE
LA UNIÓN EUROPEA.**

**THE PERMANENT REVISABLE
IMPRISONMENT: REGULATION,
CONSTITUTIONALITY AND THE
EUROPEAN UNION CONTEXT.**

Nombre del/la estudiante: Sofía Conde Iglesias

e-mail del/a estudiante: sofiaconde@usal.es

Tutor/a: Ana Isabel García Alfaraz

RESUMEN

La pena de prisión permanente revisable ha sido una medida introducida en el ordenamiento jurídico español por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Es un instrumento punitivo que ha suscitado gran debate, doctrinal y social. Para ello realizaré un análisis acerca de su regulación y las consecuencias que se derivan de la aplicación, observando como determinados derechos y libertades fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna entran en crisis, tales como el principio de humanidad de las penas y la dignidad, el mandato constitucional al legislador de que las penas tengan la finalidad resocializadora y el principio de legalidad, el cual debe regir en el ámbito penal para dotar al sistema de seguridad jurídica. Además, se elaborará un análisis comparativo en la UE en cuanto a su legislación y las consecuencias que se muestran en sus índices de criminalidad, reincidencia y población reclusa. Con ello, se trata de desacreditar los principales argumentos utilizados por nuestro legislador para la introducción de dicha pena privativa de libertad.

PALABRAS CLAVE: prisión permanente revisable, derecho comparado, principios constitucionales, reinserción, criminalidad.

ABSTRACT

The permanent revisable imprisonment has been a measure introduced into the Spanish legal system by the LO 1/2015, 30th March. It is a punitive instrument which has aroused a great debate, doctrinal and social. For this purpose, I will carry out an analysis about its regulation and the consequences which result from the implementation, considering how certain rights and fundamental freedoms recognised in our Magna Carta fall into crisis, such as the principle of humanity and the dignity, the constitutional mandate to the legislator that the criminal sentence should have a re-socializing function and the principle of legality, which should guide the criminal field to give legal certainty to the system. Moreover, a comparative analysis in the EU will be developed, which talks about its legislation and the consequences that are shown in their crime rates, recidivism and prison population. Thus, it pretends to discredit the main arguments used by our legislator to introduce such term of imprisonment.

KEYWORDS: permanent revisable imprisonment, comparative law, constitutional principles, reinsertion, crime rates,

ÍNDICE:

ÍNDICE DE ABREVIATURAS.....	1
I. INTRODUCCIÓN.....	2
II. LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.....	3
2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANTECEDENTES:.....	3
2.2 LO 1/2015, 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LO 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.	6
A) Justificación de la pena de prisión permanente revisable.....	6
B) Naturaleza jurídica de la pena de prisión permanente revisable.	7
C) Supuestos de aplicación.	7
D) Régimen de ejecución de la pena: permisos de salida, progresión en grado, revisión, libertad condicional y extinción de la responsabilidad criminal.	8
2.3 ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 2018 DEL PARTIDO POPULAR.	15
2.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN CRISIS.	16
A) Principio de humanidad de las penas.....	16
B) Principio de reinserción y reeducación social.	18
C) Principio de legalidad.	20
III. DERECHO COMPARADO. LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.....	21
3.1 REGULACIÓN EN EUROPA.	21
A) Legislación alemana.....	21
B) Legislación italiana.	24
C) Legislación francesa.....	27
D) Legislación austriaca:	32
3.2 ESTUDIO DE LAS TASAS DE CRIMINALIDAD Y DURACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE LARGA DURACIÓN EN EUROPA.	34
IV. CONCLUSIONES FINALES.....	37
V. BIBLIOGRAFÍA	41
ANEXO I.....	45

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Art.: Artículo

CE: Constitución Española

CEJFE: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

CP: Código Penal

CEDH: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil

LO: Ley Orgánica

LOGP: Ley Orgánica General Penitenciaria

RP: Reglamento Penitenciario

StGB: Código penal alemán

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

TC: Tribunal Constitucional

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

UE: Unión Europea

EUROSTAT: European statistics

I. INTRODUCCIÓN

“Estos muros son especiales. Primero los odias. Luego te acostumbras a ellos. Después de un tiempo te aferras a ellos. Quedas institucionalizado.”

ELLIS REDDING (Morgan Freeman) en *Cadena Perpetua* (1994)

En la reforma realizada por la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, al Código Penal de 1995 se introduce a nuestro Derecho una pena sin antecedentes en la historia de nuestro ordenamiento jurídico penal. Se instaura la aplicación de la pena de prisión permanente revisable basándose en la demanda de la ciudadanía, su inclusión en países europeos, fortalecer la confianza en la Administración de Justicia y en su excepcionalidad.

Ello ha dado lugar a un gran debate acerca de su posible constitucionalidad, debiendo resolver el Tribunal Constitucional si se trata de una medida conforme a nuestra Carta Magna. Desde un sector de la doctrina se propugna que dicha pena no cumple los mandatos de la Constitución de humanidad de las penas y dignidad de las personas (artículos 15 y 16), legalidad (artículo 25.1) y el mandato de que las penas tengan una finalidad de reinserción y resocialización (art. 25.2).

Por un lado, durante este año 2018 se ha presentado por el Partido Popular un Proyecto de Ley para aumentar los supuestos de hecho que serán castigados con dicha pena de prisión, los cuales obedecen a casos y víctimas reales que se han sucedido en los últimos tiempos, como Marta del Castillo. El Derecho penal se debe dirigir hacia la resocialización mientras que, actualmente, dicho principio está en crisis, ya que se orienta hacia un derecho penal más retributivo. Por otro lado, lo que demuestra el Proyecto de Ley es un acto de populismo punitivo, creando en la sociedad un sentimiento de peligro para poder legislar en favor de recortes a las libertades sociales, además de utilizar casos de víctimas reales para realizar y defender determinadas políticas.

El principal propósito del trabajo es analizar la pena de prisión permanente revisable en España y en otros Estados miembros de la Unión Europea, en los cuales se

ha inspirado nuestro legislador, y esclarecer los efectos y diferencias con los países miembros.

En el capítulo II se hará un estudio global de la pena de prisión permanente revisable desde sus antecedentes hasta la LO 1/2015 y el Proyecto de Ley presentado por el Partido Popular en 2018. En este Capítulo interesa analizar en qué ha fundamentado nuestro legislador la introducción de dicha pena, su naturaleza, supuestos de hecho y ejecución. A continuación, se realizará un análisis de las principales críticas de dicha medida, la cual ha suscitado que gran parte de la doctrina se muestre en contra, entendiéndola como inconstitucional. Por ello haremos referencia a los principios constitucionales de los arts. 10, 15 y 25 apartados 1 y 2 de nuestra Constitución.

En el capítulo III, dado que nuestro legislador se ha inspirado en los países europeos, realizaremos un estudio comparativo de países de la Unión Europea en los cuales se contempla la pena de prisión permanente revisable y sus principales características, demostrando la dureza de la implantación de dicha medida en España. Con ello, expongo una crítica hacia la necesidad de esta pena privativa de libertad en cuanto el análisis conjunto de diversas tasas: tasa de criminalidad, de población reclusa y la de reincidencia. El propósito es demostrar que en nuestro ordenamiento jurídico esta pena no es necesaria y deberíamos de buscar otras soluciones que consigan que el fin sea la reinserción y no produzcan efectos de institucionalización en los reclusos.

Para elaborarlo he analizado distintas fuentes bibliográficas como libros doctrinales, revistas jurídico-penales y de criminología, jurisprudencia de tribunales, especialmente del Tribunal Constitucional, e informes institucionales y gubernamentales.

II. LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ANTECEDENTES

La pena de prisión permanente revisable no tiene antecedentes directos en la historia de nuestro Código Penal, pero se encuentra en él una idea de perpetuidad que ha regido con anterioridad y que funcionaría como referencia para la actual pena de prisión.

En un primer momento, con el Código penal de 1822 se hace referencia a la idea de perpetuidad en su art. 47¹ al contemplar los “trabajos perpetuos” realizados en condiciones penosas porque debían portar una cadena de dos en dos o cada uno la suya², y, como alternativa, en los arts. 66 y 67³, se establecía la reclusión para el resto de su vida para los hombres mayores de setenta años y las mujeres. No obstante, no será hasta el Código Penal de 1848 cuando se introduzca por primera vez la cadena perpetua en los arts. 98 y 99⁴ para los delitos muy graves o, por otra parte, mantener la pena de reclusión perpetua, caracterizada por la segregación social, el engrilletado y la obligación de realizar trabajos que sufrían los penados. De igual manera que el anterior CP, exceptuaba a los mayores de setenta años y mujeres que se trasladarían a una casa de presidio mayor⁵.

Posteriormente, los Códigos Penales de 1850 y de 1870 conservaban dicha pena, pero el último estableciendo la posibilidad de indulto en el art. 29⁶ una vez transcurridos treinta años de cumplimiento de dicha pena, excepto para conductas de especial gravedad. También establecía el presidio mayor para las mujeres.

Finalmente, las penas de cadena y reclusión perpetuas fueron abolidas en el Código Penal de 1928 al ser consideradas inhumanas, estableciendo una pena de prisión máxima de treinta años. A diferencia de Europa, estas fueron abolidas con anterioridad

¹ Art.47 CP 1822 “*Los reos condenados a trabajos perpetuos serán conducidos al establecimiento más inmediato de esta clase, y en él estarán siempre y absolutamente separados de cualquiera otros. Constantemente llevarán una cadena que no les impida trabajar, bien unidos de dos en dos, bien arrastrando cada uno la suya. Los trabajos en que se ocupen estos delincuentes serán los más duros y penosos; y nadie podrá dispensárselos sino en el caso de enfermedad, ni se les permitirá más descanso que el preciso*”.

² CUERDA RIEZU, A. “La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son inconstitucionales en España”, *Atelier. Libros jurídicos*. Barcelona, 2011, p. 19.

³ Arts. 66 y 67 CP 1822: art. 66: “El mayor de setenta años será destinado á reclusion por el resto de su vida si la pena de su delito fuere de trabajos perpetuos deportacion, ó por el tiempo respectivo si fuere de presidio ú obras públicas. El que en estas ó .en trabajos perpetuos cumpla la 'edad de setenta años, pasará á 'acabar sus días 6 el resto de su condena en una casa de reclusion, ocupándose en lo que permitan sus fuerzas”. Art. 67. “*Lás mugeres no podrán ser condenadas á trabajos perpetuos, obras públicas ni presidio. Si cometieren delito, á que 'esté impuesta la pena de trabajos perpetuos, serán deportelas, y si incurrieren en la de obras públicas ó presidio, sufrirán el tiempo respectivo en una casa de reclusion*”.

⁴ Arts.98 y 99 CP 1848: art. 98: “*el condenado á cadena temporal ó perpetua que tuviere antes de la sentencia 60 años de edad, sufrirá la condena en una casa de presidio mayor. Si los cumplieren estando ya sentenciado, se le trasladará a dicha casa presidio en la que permanecerá durante el tiempo prefijado en la sentencia. Art. 99: “las mujeres que fueren sentenciadas á cadena temporal ó perpetua, cumplirán su condena en una casa de presidio mayor de las destinadas para las personas de su sexo*”.

⁵ CÁMARA ARROYO, S. “Crónica y crítica a la implementación de la prisión permanente revisable en la reforma penal española (2012-2015)”, *Revista Aranzadi Doctrinal* núm. 4/2016. BIB 2016/2016, p.3.

⁶ Art. 29 CP 1870: “Los condenados á las penas de cadena, reclusion y relegacion perpétuas y á la de extrañamiento perpétuo serán indultados a los treinta años de cumplimiento de la condena, á no ser que por su conducta ó por otras circunstancias graves, no fuesen dignos del indulto, á juicio del gobierno”.

a la pena de muerte⁷, que fue eliminada en el Código Penal de 1932 y reintroducida en el Código Penal de 1944 durante la Dictadura del General Franco.

A partir de la Transición Española, se trata de buscar un Derecho penal y penitenciario más humanizado, tal y como contempla el art. 25 CE, entendiendo que la pena de prisión obedece a los fines de reinserción y resocialización y prohíbe los tratos inhumanos o degradantes y las torturas; también, por la Ley Orgánica General Penitenciaria, de 26 de septiembre de 1979⁸.

En 1995 entra en vigor nuestro actual Código Penal, el cual ha sufrido excesivas reformas con una tendencia al endurecimiento de las penas, convirtiéndose en un Código de la seguridad⁹. Es llamativo en este caso, que el CP de la democracia fuera más duro que el Código Penal de 1973¹⁰, el de la dictadura, ya que establecía el cumplimiento de la pena máxima con duración de 20 años o, incluso, 30 años, mientras que el de 1973 observaba la redención de penas por el trabajo, pudiendo salir de prisión al haber cumplido la mitad de la pena¹¹.

Este objetivo se intensificó con la LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Comparativamente es más dura la pena de prisión de 40 años, en virtud de concurso, que la permanente revisable por el hecho de que la libertad condicional, en el primer caso, no se obtendría hasta no haber cumplido 35 años, mientras que en la pena de prisión permanente revisable se cumplen 25 años para la primera posible suspensión¹². De este modo, se podría entender que estaríamos ante una pena de prisión más dura y encubierta que en el caso de muchos de los países de Europa que tomamos como referencia para este tipo de solución penal¹³.

Todo ello ha culminado con la situación actual, contemplando e introduciendo la novedad de la pena de prisión permanente revisable en la LO 1/2015, de 30 de marzo,

⁷ CUERDA RIEZU, A. "La cadena...", op., cit., p. 2.

⁸ PASCUAL MATELLÁN, L. "La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado", *CLIVATGE. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials*, N°3, p. 54. <http://revistes.ub.edu/index.php/clivatge/article/view/11981> (10/04/2018)

⁹ PASCUAL MATELLÁN, L. "La prisión permanente revisable...", op., cit., p. 55.

¹⁰ FERNANDEZ GARCÍA, J. "El proyecto de reforma del código penal de 2013 a debate", *las penas privativas de libertad en la reforma Gallardón: especial referencia a la prisión permanente revisable* Ratio Legis, Madrid, 2014, Pág.61.

¹¹ CUERDA RIEZU, A. "La cadena...", op., cit., pág. 36.

¹² FERNANDEZ GARCÍA, J. "El proyecto...", op., cit., p. 64.

¹³ CUERDA RIEZU, A. "La cadena...", op., cit., p. 23.

queriendo, actualmente, ser objeto de reforma para su ampliación. Por lo tanto, se trata de derecho penal de autor y del enemigo¹⁴

2.2 LO 1/2015, 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LO 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL

A) **Justificación de la pena de prisión permanente revisable**

Se debe comenzar por el análisis que hace el legislador en la Exposición de Motivos de la LO 1/2015 y así poder comprender cuál es el fin por el cual se introduce en nuestro ordenamiento jurídico una pena de tal naturaleza.

En primer lugar, el legislador justifica su creación por las demandas sociales y por el transcurso de la sociedad que hacen necesario un cambio legislativo en el CP para hacerlo más ágil y coherente.¹⁵

En segundo lugar, como fundamento y finalidad de la reforma acontecida en 2015 cabe señalar que se trata de *“la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas”* Para ello, utiliza argumentos basados en la inspiración del modelo de otros países de Europa, como la legislación alemana, francesa, italiana o austriaca, los cuáles analizaremos en el segundo capítulo y atenderemos a las consecuencias de tales penas de prisión.

En tercer lugar, habrá que estar a la excepcionalidad de las penas, siendo establecidas para delitos de extrema gravedad, tales como *“asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad”*¹⁶ y, por tanto, alega que existe proporcionalidad entre los tipos de delitos y la pena impuesta.

En cuarto lugar, alude al carácter que tiene de pena indeterminada, susceptible de revisión tras haber cumplido un gran transcurso de tiempo. Aún así, el legislador entiende que esta pena, siguiendo con el mandato constitucional, no renuncia a la reinserción del penado, ya que un tribunal valorará la situación del condenado para analizar su reinserción o no en la sociedad. En caso de no ser favorable, se le llevará a cabo una nueva revisión de la situación y, si se diera el caso contrario, se establecería

¹⁴ FERNANDEZ GARCÍA, J “El proyecto..., op., cit., .p. 71.

¹⁵ Exposición de motivos de LO 1/2015, 30 de marzo.

¹⁶ Exposición de motivos de la LO 1/2015, 30 de marzo.

libertad condicional y medidas de control orientadas a la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, entiende el legislador que:

No constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión.

Finalmente lo justifica por ser un modelo extendido en Derecho comparado y reconocido por el TEDH y España al ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional que prevé este tipo de pena.

B) Naturaleza jurídica de la pena de prisión permanente revisable

Se trata de una pena excepcional reservada para delitos de extrema gravedad, por lo tanto, estamos ante una pena privativa de libertad grave según los arts. 33.2 a)¹⁷ y 35 CP¹⁸. Como aspecto fundamental y más llamativo es que es indeterminada¹⁹, es decir, no tiene un mínimo ni máximo, por lo que a la hora de atender a la participación, el grado de ejecución y las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal puede plantear problemas. Atendiendo a las reglas generales para aplicación de las penas, se entiende en el art. 70.4 CP que *“la pena inferior en grado de la prisión permanente revisable es de veinte a treinta años, siendo, incluso, superior que el límite fijado para la primera revisión a los 25 años”*. Por el contrario, se produce una laguna legal en cuanto a la pena superior en grado, pudiendo considerarse contrario al art. 25.1 CE al establecer el principio de legalidad, que implica certeza y taxatividad, además de seguridad jurídica para que los ciudadanos puedan prever las consecuencias²⁰.

C) Supuestos de aplicación

Su ámbito de aplicación, excepcionalísimo, se compone de diferentes delitos. En primer lugar, el delito de asesinato cuando concurra alguna circunstancia prevista en el

¹⁷ Art. 32. 2 a) CP: *“Son penas graves: a) la prisión permanente revisable”*.

¹⁸ Art. 35 CP: *“Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código”*.

¹⁹ RUBIO LARA, P.A. “Prisión permanente revisable. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de constitucionalidad”. *Aranzadi doctrinal* n° 3/2016, 2016, p. 12.

²⁰ RUBIO LARA, P.A. “Prisión permanente revisable...”, op., cit, p. 32.

art. 140 CP²¹. En segundo lugar, se aplicará para los delitos de terrorismo contemplados en el art. 573 bis 1 CP²². En tercer lugar, se prevé para los delitos de regicidio y contra la comunidad internacional contemplados en los arts. 485.1²³ y 605.1 CP²⁴ correspondientemente. En cuarto lugar, el art. 607 apartado 1 CP²⁵ contempla los supuestos de genocidio. En último lugar, se aplicará para delitos de lesa humanidad del art 607 bis apartados 1 y 2.1 CP²⁶.

D) Régimen de ejecución de la pena: permisos de salida, progresión en grado, revisión, libertad condicional y extinción de la responsabilidad criminal

- Permisos de salida

Tienen que cumplir el mandato constitucional del art. 25.2 CE de reinserción y reeducación social del condenado, aunque no se configuran como un derecho subjetivo

²¹ Art 140 CP: “1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.

2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo”.

²² 573 bis 1. 1 CP: “1. Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior serán castigados con las siguientes penas: 1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara la muerte de una persona”.

²³ Art. 485.1 CP: “El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será castigado con la pena de prisión permanente revisable”.

²⁴ Art. 605.1 CP: “El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión permanente revisable”.

²⁵ Art. 607 1 CP: “1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados:

1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus miembros.

2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149”.

²⁶ Art. 607 bis apartados 1 y 2 1º CP: “1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:

1.º Por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

2.º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

2. Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados: 1.º Con la pena de prisión permanente revisable si causaran la muerte de alguna persona”.

o fundamental del penado²⁷. Están previstos para preparar al penado para la vida en libertad, tal y como lo reconoce las SSTC 19/1988 Y 112/1996²⁸. Además, sirven para reducir los efectos del internamiento y, por tanto, es un estímulo para el condenado para mantener una buena conducta. Para ello, es necesario cumplir determinados requisitos objetivos que prevé la ley, ya que también es una vía para volver a delinquir.

El art. 36.1 párrafo 3º CP establece unos requisitos distintos para la prisión permanente revisable a los ordinarios, estos últimos contemplados en el art. 47.2 LOGP²⁹ y 154 y ss. RP³⁰, “*en estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a³¹), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b³²)*”.

- Progresión en grado y revisión

²⁷ PALOMO DEL ARCO. A “La pena de prisión permanente revisable. Una pena innecesaria” Ministerio fiscal, ponencias, 2016, p. 20.

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Palomo%20del%20Arco.%20Andr%C3%A9s.pdf?idFile=329a7f6c-1e53-404f-b11e-0de937ac12aa

²⁸ STC 112/1996, de 24 de junio, FJ 4º: “La posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 de la Constitución) o como han señalado la STC 19/1988 (RTC 1988\19), la «corrección y readaptación del penado», y se integra en el sistema progresivo formando parte del tratamiento. Este Tribunal ha reiterado en varias ocasiones que el art. 25.2 de la Constitución no contiene un derecho fundamental, sino un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria; se pretende que en la dimensión penitenciaria de la pena privativa de libertad se siga una orientación encaminada a esos objetivos, sin que éstos sean su única finalidad. Pero que este principio constitucional no constituya un derecho fundamental no significa que pueda desconocerse en la aplicación de las leyes, y menos aún cuando el legislador ha establecido, cumpliendo el mandato de la Constitución, diversos mecanismos e instituciones en la legislación penitenciaria precisamente dirigidos y dirigidas a garantizar dicha orientación resocializadora, o al menos, no desocializadora precisamente facilitando la preparación de la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena”.

²⁹ Art. 47.2 LOGP: “Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo o tercer grado, respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta”.

³⁰ Art. 154 RP: “1. Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta.

2. límites máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de permisos antes señalados, se distribuirán, como regla general, en los dos semestres naturales de cada año, concediendo en cada uno de ellos hasta dieciocho y veinticuatro días, respectivamente.

3. Dentro de los indicados límites no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el artículo siguiente”.

³¹ Art. 36.1 párrafo 2 a) “Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código”.

³² Art. 36.1 párrafo 2 b) “Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.”

Pese al carácter indeterminado de la pena de prisión permanente revisable, tiene un sistema de revisión que podría dar lugar a la suspensión de la pena. Para producirse la revisión de la situación del reo se deben dar determinadas circunstancias contempladas en el art. 92.1 a) y b) que fundamenten el pronóstico favorable de reinserción social del Tribunal colegiado³³.

En primer lugar, se trata de un requisito temporal contemplado en el art. 92.1 a) CP: *“que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis³⁴ para los casos regulados en el mismo”*.

³³ DAUNIS RODRIGUEZ, A “prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación al acervo punitivo español”, *Revista de Derecho y Criminología*, 3ª Época, nº X, 2013, p. 78. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5040704>

³⁴ Art. 78 bis CP: *“1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:*

a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.

2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido:

a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior.

b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.

3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.

En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) del apartado primero”.

Art 78.1 a) y b) : *“Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años”.*

Art. 78.1 c) : *“Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más”.*

En segundo lugar, será necesario que “*el penado se encuentre clasificado en tercer grado*” de tratamiento penitenciario, tal y como reconoce el art. 92.1 b) CP. En este tipo de pena se realizan excepciones al sistema de individualización científica contemplado en la LOGP, sistema de ejecución de las penas que clasifica al penado en diversos grados atendiendo a criterios variables y, por tanto, dejando margen de actuación a la Administración penitenciaria³⁵,

El art. 36.2 CP recoge el periodo de seguridad al entender que “*Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta*”. Por lo tanto, en este caso estamos ante una potestad, la cual se convertirá en un mandato para los delitos enumerados en el 36.2 párrafo 3º CP:

a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código. b) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal; c) Delitos del artículo 183; d) Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este Código, cuando la víctima sea menor de trece años.

Además, en el art. 78 bis 1 y 3 CP regula la progresión en grado, estableciendo unos plazos excepcionales:

1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:

a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.

3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero

³⁵ NISTAL BURÓN. J “La medida de seguridad derivada de una pena de «prisión permanente revisable». la duración de la misma como parte de la garantía ejecutiva” *Revista Aranzadi Doctrinal* num.7/2013, 2013, p. 6.

Además, se exige que la clasificación en 3º grado sea autorizada por el Tribunal, aunque primeramente se necesite un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, y habiendo sido oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias.³⁶

Por último, teniendo presentes estos requisitos, el Tribunal debe valorar la situación del penado para emitir un pronóstico, favorable o no, atendiendo a los criterios del art. 92.1 c) CP³⁷, los cuales son determinados para el caso concreto de la prisión permanente revisable, es decir, son criterios legales *ad hoc*³⁸. Dentro de estos criterios llaman la atención aquellos que se tienen en cuenta a la hora de elegir la consecuencia jurídica del delito cometido o para acceder a uno de los grados de cumplimiento de la condena, como por ejemplo, los antecedentes, relevancia de los bienes jurídicos afectados por el delito o las circunstancias del delito.

En el caso de que el tribunal lo denegara, se establece en el preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, que debe revisar la situación del penado de oficio cada dos años y cuando éste lo solicite, en caso de desestimarse se establecerá un plazo máximo de un año sin poder realizar nuevas solicitudes³⁹

- Libertad condicional y suspensión de la pena

Una vez producida la suspensión de la pena, habría que tener en cuenta los plazos de suspensión contemplados en el art. 92.3 CP de “*tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado*”. Durante este tiempo el condenado tendrá una serie de deberes y prohibiciones, contemplados en el art. 83.1 CP⁴⁰, para evitar que el condenado

³⁶ NISTAL BURÓN, J. “La medida de seguridad...”, op., cit., p. 8.

³⁷ Art. 92.1 c) CP: “*Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse aceptados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.*

En el caso de que penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos o que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos”.

³⁸ DAUNIS RODRIGUEZ, A. “Prisión permanente revisable...”, op., cit., p. 80.

³⁹ RUBIO LARA, P.A. “Prisión permanente revisable. Análisis doctrinal...”, op., cit., p. 13.

⁴⁰ Art. 83.1 CP: “*1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados:*

delinca, pero siempre que sean proporcionados y no excesivos. Del control del cumplimiento se encargará la Administración penitenciaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado⁴¹. La decisión de la suspensión puede ser revocada o que remita definitivamente según el cumplimiento de los deberes anteriormente mencionados.

El juez acudirá a la revocación y ordenación de la ejecución de la pena, conforme al art. 86.1 CP cuando:

- a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida.
- b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria.
- c) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.
- d) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el art. 589 LEC⁴².

1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea acordada.

2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.

3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.

4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.

5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para informar de sus actividades y justificarlas.

6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, y otros similares.

7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.

8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos.

9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona”.

⁴¹ PALOMO DEL ARCO, A. “La pena de prisión permanente revisable...”, op., cit., p. 31.

⁴² Art. 589.1 LEC: “Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la

En el caso de no ser el incumplimiento suficientemente grave y reiterado de dichos deberes, el art. 86.2 CP entiende que el juez o tribunal podrá *“imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas o prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado”*.

No obstante, el propio art. 92.3 CP, el cual había remitido al artículo anterior, establece de forma paralela que:

El juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.

Por lo tanto, parece excesiva la redacción del art. 86 CP y, además, parece inútil que quien realice este control sea el juez de vigilancia penitenciaria, el cual no ha intervenido en ningún momento en la revisión y suspensión de la pena⁴³.

Tras dos años de la decisión de volver a ejecutar la pena, se tendrá que revisar nuevamente la situación del penado. La pena tendrá la duración indeterminada en el caso de que no se estime ningún pronóstico favorable por parte del Tribunal colegiado.

- Extinción de la responsabilidad criminal

Según el art. 87 CP, la extinción de la responsabilidad criminal, contemplada en el art. 130.1.3 CP⁴⁴, procede cuando no delinca y siga las reglas de conducta que en su caso se dictaron⁴⁵. Ello será acompañado con la medida de libertad vigilada de 5 a 10 años, contemplada en el art. 106 CP⁴⁶. La cancelación de antecedentes podrá solicitarse a los diez años desde la remisión definitiva sin delinquir.

ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título”.

⁴³ PALOMO DEL ARCO, A. La pena de prisión permanente revisable..., op., cit., p. 32.

⁴⁴ Art. 130.1.3 CP: *“La responsabilidad criminal se extingue: por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87”*.

⁴⁵ MUÑOZ CUESTA, J. “La prisión permanente revisable: una pena objeto de polémica social”, *Actualidad Jurídica Aranzadi* núm. 938/2018, 2018, p. 2.

⁴⁶ Art. 106.1 CP: *“La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:*

- a) *La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.*
- b) *La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.*
- c) *La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio de lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.*

2.3 ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 2018 DEL PARTIDO POPULAR

El 9 de febrero de 2018 el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de justicia, ha impulsado el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para ampliar los supuestos delictivos a los que aplicar la pena de prisión permanente revisable.

La justificación de esta ampliación se basa en las iniciativas suscitadas desde su aprobación desde 2015 para extender dicha pena a otros hechos delictivos muy graves. Para el Gobierno se trata de una situación de necesidad y proporcionalidad. Los supuestos que se incorporarían al catálogo ya previsto anteriormente son⁴⁷:

- Asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares. Lo cual es muy criticado puesto que produce la idea de que la justicia ya no tendrá motivación para seguir buscando el cuerpo de las víctimas.
- Asesinato después de secuestro.
- Violaciones en serie.
- Violación a un menor tras privarle de libertad o torturarlo.
- Muertes en incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Estos supuestos obedecen a casos de los últimos años que se han sucedido en España. Entiendo que las modificaciones del Código Penal siempre son consecuencia de la necesidad de ajustarse a la sociedad, pero nunca debería de legislar la opinión popular

-
- d) *La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal.*
 - e) *La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares o a otras personas que determine el Juez o Tribunal.*
 - f) *La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.*
 - g) *La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.*
 - h) *La prohibición de residir en determinados lugares.*
 - i) *La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.*
 - j) *La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.*
 - k) *La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico”.*

⁴⁷Ministerio de Justicia, gabinete de comunicación, noticias del Ministerio. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428689887?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D180209_Anteproyecto_LO_modificacio%CC%81n_Co%CC%81digo_Penal_PPR.pdf&blobheadervalue2=1288797401311

en temas que limitan con Derechos Humanos, sino que es el Estado quien debe analizar la situación para ello.

Por otra parte, podría entenderse que está pena, ante la ampliación de supuestos, empezaría a perder el carácter de excepcionalísima en el caso de que siempre que las demandas sociales exijan un endurecimiento del Código Penal se recurra a esta posición, sin tener en cuenta otro tipo de alternativas que sean menos lesivas para el penado y que no impliquen una restricción tan drástica de derechos fundamentales.

El 15 de marzo de 2018, el Congreso de los Diputados rechazaba las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y Ciudadanos para endurecer la pena de prisión permanente revisable.

2.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN CRISIS

Habiendo estudiado las posibles leyes que podrían tener vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, se tiene que analizar las principales garantías constitucionales que rigen en el Derecho penal y que entran en crisis con la introducción al Código Penal de 1995 por LO 1/2015, de 30 de marzo, de la pena de prisión permanente revisable y el Anteproyecto de 2018. Para ello me basaré en el principio de humanidad de las penas, el principio de reinserción y reeducación social y el principio de legalidad, todos ellos contemplados en nuestra Constitución y tratándose de Derechos y libertades fundamentales.

A) Principio de humanidad de las penas

Se contempla en el art. 15 CE⁴⁸ y debe conectarse con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, recogido en el art. 10 CE⁴⁹, quedando prohibidas las penas o tratos inhumanos o degradantes, tales como la pena de muerte, penas corporales y las penas privativas de libertad de excesiva duración⁵⁰. Este artículo deriva y se

⁴⁸ Art 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.

⁴⁹ Art.10 CE: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

⁵⁰ SÁNCHEZ ROBERT, M^a JOSÉ, “La prisión permanente revisable en las legislaciones española y alemana”, *Revista Universidad de Murcia. Anales de Derecho*, 2016, p. 33. <http://revistas.um.es/analesderecho/article/view/247661>.

inspira en los art. 5 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos⁵¹ y art. 3 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma⁵².

Existe consenso acerca de que la cadena perpetua es incompatible con la dignidad humana debido a la prisionización del condenado y de la crueldad que supone para el ser humano. El debate se produce al entenderla revisable, ya que muchos entienden que el derecho a la libertad y el principio resocializador no se vería alterado cuando se puede valorar la situación del condenado y acceder a la libertad. El TEDH lo compatibiliza al entender que deben existir posibilidades reales y legales de suspensión, reducción o conmutación.⁵³

Aún así, estoy de acuerdo con LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L al reconocer que:

Si ni la pena de muerte, ni las mutilaciones ni, no olvidemos, ningún tipo de pena corporal pasan el filtro de la humanidad de las penas, aunque se las someta a condición, tampoco la cadena perpetua, se transmuta en humana porque sea revisable. La prisión permanente sometida a revisión sigue siendo cruel y degradante por todo lo que conlleva.

Tampoco sería constitucional la medida punitiva cuando la pena de prisión permanente revisable se convierta en perpetua puesto que el condenado será privado totalmente de su derecho fundamental de libertad. Además, no se contempla que el condenado se “institucionaliza” al pasar tanto tiempo en la cárcel, por lo que la posibilidad de pasar el examen del Tribunal acerca de su reinserción y aptitud para vivir en la sociedad es muy complicada. De este modo, no existe una certeza de su finalización, con los perjuicios psíquicos que conlleva, pudiendo alargarse hasta su muerte. Por lo tanto, no sería compatible con este principio de humanidad de las penas⁵⁴.

⁵¹ Art. 5 DUDH: “Nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

⁵² Art. 3 CEDH: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”

⁵³ DAUNIS RODRÍGUEZ, A, “Prisión permanente revisable..., op., cit., p. 85.

⁵⁴ LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L. “Dictamen sobre la Constitucionalidad de la prisión permanente revisable” *Contra la cadena perpetua*. Colección de estudios penales MARINO BARBERO SANTOS nº 16, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016, p. 33.

<file:///C:/Users/M%C2%AA%20%C3%81ngeles/Desktop/UNIVERSIDAD/8%20octavo%20cuatrimestre/TFG/articulos/CONTRA%20LA%20CADENA%20PERPETUA.pdf>

Cabe añadir que el acceso a la libertad del reo no depende de él, no puede responsabilizarle de su mantenimiento en prisión que, en contraste con otras legislaciones, no incorpora factores precisos relativos a cómo puede contribuir el reo a mejorar su pronóstico⁵⁵. Por su parte, el Consejo de Europa y el TEDH exigen una regulación específica que prevea tratamientos que sirvan para reducir los efectos de la prisionización en la ejecución de las penas de larga duración⁵⁶.

B) Principio de reinserción y reeducación social

Se encuentra regulado en el art. 25.2 CE⁵⁷ y debe entenderse como el principal fin de las penas. Los defensores entienden que no se afecta la capacidad de reinserción social del condenado y se aboga por un tratamiento penitenciario idéntico al del resto de reclusos, tal y como establece la Exposición de motivos de la LO 1/2015⁵⁸.

El TC entiende, como ya he indicado con anterioridad, que la reinserción y resocialización no se trata de un derecho subjetivo, estando las penas orientadas también a otros fines legítimos. Por lo que debe ser compatible con la prevención general y la retribución⁵⁹, sin ignorarse el mandato constitucional de la orientación a la resocialización.

⁵⁵ FERRER GARCÍA. A.M “La reforma del Código penal a debate” *La prisión permanente revisable a revisión*, Cuadernos penales José María Lidón, Deustodigital, Núm. 12, 2016, p. 28. <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/lidon/lidon12.pdf>

⁵⁶ LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L. “Dictamen sobre la Constitucionalidad..., op., cit., p 35.

⁵⁷ Art. 25.2 CE: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

⁵⁸ MATELLÁN, L. “La prisión permanente revisable..., op., cit., p. 56.

⁵⁹ STC 160/2012, de 20 de septiembre. FJ 4º: “La reinserción social es una de esas finalidades, a la que, según mandato constitucional (art. 25.2 CE), deben estar orientadas las penas y medidas privativas de libertad, pero no es el único cometido con que las penas operan en aras a satisfacer el fin de protección de bienes jurídicos, ni debe ser esa, como hemos venido reiterando, la interpretación que haya de hacerse del precepto constitucional. Debe resaltarse, en este sentido, que «el mandato presente en el enunciado inicial de este art. 25.2 tiene como destinatarios primeros al legislador penitenciario y a la administración por él creada, según se desprende de una interpretación lógica y sistemática de la regla» (STC 19/1988, de 16 de febrero , F. 9), Cabe afirmar, así, que la finalidad de reinserción social se proyecta esencialmente sobre la fase de ejecución, en la que se materializa la afección al derecho a la libertad (art. 17.1 CE) de quien resulta penalmente sancionado, pero ha de armonizarse con otros fines legítimos de la pena, que adquieren mayor protagonismo en otros momentos de intervención del ius puniendi . En particular, la finalidad de prevención general, tanto en su vertiente de disuasión de potenciales delincuentes mediante la amenaza de pena, como de reafirmación de la confianza de los

Aún así, persiguiendo tales fines se estaría afirmando que una de las funciones de la pena de prisión es evitar que vuelva a delinquir el condenado, basándose en la peligrosidad de éste. Lo cual, no goza de una certeza y se vulnerarían derechos humanos del penado⁶⁰. Eso sí, hay que destacar que nos encontramos no sólo ante un Estado de derecho, sino que también es social y democrático. Por lo tanto, encontrándose de acuerdo CUERDA RIEZU con MIR PUIG, no se puede marginar al delincuente, debiendo el Estado fomentar la participación de todos en la vida social⁶¹.

Para la reinserción social es necesario el tratamiento penitenciario, siendo más fácil conseguirla cuando el condenado esté menos desocializado, de tal manera que mantenga los lazos sociales y familiares del exterior y la privación de libertad no sea excesiva, ya que si no se socializará al clima de la prisión, es decir, sufrirá un proceso de prisionización que afecte a sus capacidades para poder vivir en libertad en la sociedad y se adaptará a las condiciones de la vida en prisión⁶². Durante el periodo en prisión, en las penas de larga duración, el penado sufre diversos efectos, tanto de cara al exterior, pudiendo romperse los lazos con sus familiares y amigos debido al estigma de la pena de prisión, y al interior, ya que tendrá que convivir de forma forzada con otras personas, provocando una conflictividad personal que puede derivar en depresiones, baja autoestima o habilidades sociales.⁶³

Esto pone de relieve cuál es el máximo de privación de libertad imponible para no generar desocialización, considerando sobre los quince años⁶⁴, duración imposible en nuestro ordenamiento jurídico y sociedad debido al populismo punitivo que adolece a nuestra sociedad y que está a favor del cumplimiento efectivo e íntegro de los condenados. Por lo tanto, el periodo para la suspensión de la pena resulta excesivo en España. Además, como hemos visto, son necesarias y más efectivas otras medidas de reinserción que sirvan para mantener las relaciones del exterior del penado.

Por un lado, el periodo de seguridad para otorgar el tercer grado es excesivo, ya que, y adelantándome al siguiente capítulo, se fija en el mismo periodo que otros países

ciudadanos en el respeto de las normas penales, constituye igualmente un mecanismo irrenunciable para el cometido de protección de bienes jurídicos”.

⁶⁰ RUBIO LARA. P.A. “Prisión permanente revisable..., op., cit., p. 33.

⁶¹ CUERDA RIEZU, A. “La cadena..., op., cit., p. 67.

⁶² RUBIO LARA. P.A. “Prisión permanente revisable..., op., cit., p. 34.

⁶³ CUERDA RIEZU, A. “La cadena..., op., cit., p. 69 y 70.

⁶⁴ JUNATEY DORADO, C. “Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable”, *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, tomo 65, 2012, p. 143.

de Europa establecen como plazo para suspender la pena. Incluso llegando a los treinta y dos años para acceder a la progresión en grado para los casos excepcionales de delitos de terrorismo u organizaciones criminales. De igual modo ocurre con los permisos de salida, no pudiendo otorgarlos hasta no haber cumplido ocho o doce años de pena de privación de libertad⁶⁵.

Por otro lado, son criticables las pautas para decidir la aptitud para la puesta en libertad y reintegración en la sociedad, tales como los antecedentes penales o las circunstancias del delito que ya han sido valorados en la determinación de la pena⁶⁶ y que, por tanto, no deberían de influir en si el condenado ha adquirido las habilidades suficientes para reinsertarse en la sociedad⁶⁷.

C) Principio de legalidad

Recogido en el art. 25.1 CE⁶⁸ y base del Estado de Derecho, desprende una serie de garantías que rigen en el ordenamiento jurídico penal, especialmente: la determinación, certeza o taxatividad de las normas penales; es decir, habría que ponerlo en relación con la seguridad jurídica establecida en el art. 9.3 CE⁶⁹.

Es necesaria la concreción de la pena y así lo ha reconocido el TC, que desecha del ordenamiento jurídico las sanciones arbitrarias o indeterminadas⁷⁰. Por lo tanto, deben estar fijados los límites mínimos y máximos, éstos últimos no fijados en la pena de prisión permanente revisable y quedando sujetos al examen del Tribunal, el cual como ya se ha dicho, ha sido criticado por su falta de objetividad⁷¹.

⁶⁵ LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L. "Dictamen sobre la Constitucionalidad...", op., cit., p 78.

⁶⁶ DAUNIS RODRIGUEZ, A. "Prisión permanente revisable...", op., cit., p. 99.

⁶⁷ LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L. "Dictamen sobre la Constitucionalidad...", op., cit., p. 74

⁶⁸ Art. 25.1 CE: "*Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento*".

⁶⁹ Art. 9.3 CE: "*La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos*".

⁷⁰ DAUNIS RODRÍGUEZ, A. "Prisión permanente revisable...", op., cit., p. 89.

⁷¹ Ídem, p. 101.

Además, la condición del pronóstico de reinserción, la cual pondrá fin a la pena, tiene un contenido impreciso y arbitrario que hace ver una posible vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica, e incluso, como habíamos dicho anteriormente, de reinserción⁷².

III. DERECHO COMPARADO. LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN EUROPA

3.1 REGULACIÓN EN EUROPA

Se trata de una de las razones en las que se fundamenta la implantación de la pena de prisión permanente revisable. Nuestro legislador toma como ejemplo los países europeos que regulan dicha cuestión. Por lo tanto, analizaré brevemente la legislación de distintos países y se comprobarán las diferencias con España.

A) Legislación alemana

El Código penal alemán contempla conjuntamente en su parágrafo 38⁷³ la pena privativa de libertad temporal y a perpetuidad, esta última siendo la pena más dura del ordenamiento jurídico alemán tras la abolición de la pena de muerte⁷⁴.

Tal y como señala SÁNCHEZ ROBERT, la pena privativa de libertad a perpetuidad se establece como pena absoluta, sin posibilidad alguna de atenuación, solamente en el asesinato, según el § 211 StGB⁷⁵ y en los casos especialmente graves del homicidio deliberado del § 212 apartado 2 StGB⁷⁶.

⁷² LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L. "Dictamen sobre la Constitucionalidad...", op., cit., p. 67.

⁷³ §38 StGB "(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht. (2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat". ((1) La pena privativa de libertad es temporal si la ley no conmina con pena privativa de libertad perpetua. (2) El máximo de la pena privativa de la libertad temporal es de quince años y el mínimo de un mes).

⁷⁴ SÁNCHEZ ROBERT, M.J. "La prisión permanente revisable...", op., cit., p. 9.

⁷⁵ § 211 StGB: "(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet". ((1) El asesino se castigará con pena privativa de la libertad de por vida (2) Asesino es quien por placer de matar, para satisfacer el instinto sexual, por codicia, o de otra manera por motivos bajos, con alevosía, o cruelmente, o con medios que constituyen un peligro público, o para facilitar otro hecho o para encubrirlo mata a un ser humano).

⁷⁶ § 212 apartado 2 StGB: "(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. (2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen". ((1) Quien mata a un ser humano sin ser asesino será condenado como

Opcionalmente, se establece la pena de prisión a perpetuidad junto a una pena de prisión no inferior a diez años para las siguientes conductas delictivas: alta traición contra la República Federal en el § 81 StGB⁷⁷, secuestro bajo coacción y la toma de rehenes con resultado de muerte del § 239a apartado 2, § 239b apartado 2 StGB, robo violento a un conductor que reconoce el § 316a apartado 1 StGB, en el robo, hurto predatorio y la coacción predatoria con resultado de muerte, contemplados en los arts. § 251 § 252 y § 255 StGB, envenenamiento que genere un peligro público con resultado de muerte según el § 314 apartado 2 StGB, provocación de inundación con resultado de muerte contemplada en el § 313 StGB, o el ataque a una aeronave con resultado de muerte según el § 316c apartado 3 StGB.

También junto a una pena privativa de libertad no inferior a cinco años se puede imponer la pena de prisión a perpetuidad en casos especialmente graves de traición a la patria del § 94 apartado 2 StGB, de relaciones que pongan en peligro la paz contemplado en el § 100 apartado 2 StGB, de revelación ilegal de secretos del § 97^a StGB o el incendio provocado que sea especialmente grave, regulado en el § 306b StGB.

Lo que verdaderamente hace constitucional la pena alemana es el régimen de revisión que establece el ordenamiento jurídico alemán, el cuál es más benévolo que el español. Se establecen determinados requisitos en el § 57a apartados 1 y 2 StGB⁷⁸ para suspender la ejecución de dicha pena y dar paso a la libertad condicional:

homicida con pena privativa de la libertad no inferior a cinco años. (2) En casos especialmente graves se reconocerá cadena perpetua).

⁷⁷ § 81 apartado 1 StGB: “(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt

1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder

2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft”.

((1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia, 1. perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania 2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años).

⁷⁸ § 57a apartados 1 y 2 StGB: “(1) Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung aus, wenn

1. fünfzehn Jahre der Strafe verbüßt sind,

2. nicht die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung gebietet und

3. die Voraussetzungen des § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegen.

2 § 57 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 gilt entsprechend.

(2) Als verbüßte Strafe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 gilt jede Freiheitsentziehung, die der Verurteilte aus Anlaß der Tat erlitten hat”. ((1) El tribunal suspende la ejecución del resto de la pena privativa de la libertad perpetua para conceder la libertad condicional cuando: 1. se hayan cumplido quince años de la pena 2. la especial gravedad de la culpa del condenado no imponga el ulterior cumplimiento; y, 3. existen los presupuestos del § 57 inciso 1 frase 1 numeral 2 y 3. El § 57 inciso 1 frase segunda e inciso 5 rigen en lo pertinente. (2) Como pena cumplida en el sentido del inciso primero frase 2 numeral 1 vale toda privación de la libertad que el condenado haya sufrido con ocasión de su hecho).

En primer lugar, tienen que “*haberse cumplido quince años de la pena*”. Cabe señalar que esta duración de quince años es el límite establecido por la doctrina para que las penas de prisión permanente o perpetua, aunque revisable, estén encaminadas a la resocialización⁷⁹. Fue el propio TC Alemán quien entendió, en la Sentencia de 21 de junio de 1977⁸⁰, que solo puede ser admitida la prisión perpetua en atención a la dignidad humana si se establece una revisión a partir de los 15 años de cumplimiento efectivo y si el condenado tiene alguna posibilidad real de acceder a la libertad condicional y a la resocialización (sin que baste para ello la vía del indulto). El TC alemán, al igual que en España⁸¹, entiende que no se lesionará en el caso de pronóstico desfavorable o razones de seguridad pública, ya que entiende que la prevención especial no es el único fin de la pena y que no es contraria al fin de reinserción social, en tanto que se revisa periódicamente la condena y la permanencia del reo en prisión depende de su peligrosidad concreta.

En segundo lugar, “*la especial gravedad de la culpa del condenado no imponga su ulterior cumplimiento*”. Es decir, no es necesario seguir cumpliendo la pena debido a la valoración de culpabilidad del autor. Para determinar la “especial gravedad de la culpabilidad”, se atiende tanto al hecho delictivo, como a la personalidad del infractor.⁸²

En tercer lugar, “*se den los presupuestos del § 57 inciso 1 frase 1 numerales 2 y 3. El § 57 inciso 1 frase segunda e inciso 5 rigen en cuanto resulten aplicables*”. Ello quiere decir que se pueda justificar teniendo en cuenta los intereses de la seguridad pública en general. Por lo tanto podríamos asemejarlo al pronóstico de reinserción que es necesario en nuestro ordenamiento jurídico.

En último lugar, se debe contar con el consentimiento del culpable ya que es posible, como ya se ha comentado con anterioridad, que el reo sufra las consecuencias de la institucionalización.

Tal y como contempla el § 56b) StGB⁸³, la libertad condicional, además, puede ir de las obligaciones impuestas por el tribunal. Según el § 57a apartados 3 y 4 StGB⁸⁴,

⁷⁹ DAUNIS RODRIGUEZ, A. “la prisión permanente revisable...”, op., cit. p. 92.

⁸⁰ ROIG TORRES, M. “Coste de la prisión versus eficacia preventiva. ¿Está justificada la prisión indefinida?” XVII Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal: Análisis económico del Derecho y Derecho penal, Universidad de León, 2016, p. 8-10.

⁸¹ STC 160/2012, de 20 de septiembre. FJ 4º.

⁸² ROIG TORRES, M. “La cadena perpetua en el Derecho Alemán y Británico. La prisión permanente revisable”, *Iustel*, 2016, p. 40.

⁸³ § 56b) StGB: “(1) *Das Gericht kann dem Verurteilten Auflagen erteilen, die der Genugtuung für das begangene Unrecht dienen. 2Dabei dürfen an den Verurteilten keine unzumutbaren Anforderungen gestellt werden.*

(2) *Das Gericht kann dem Verurteilten auferlegen,*

“el tiempo de duración de la libertad condicional será por un periodo de 5 años y, en caso de no admitirse, podrá fijar un plazo máximo de dos años durante el cual no admitirá una nueva solicitud de libertad del penado”.

Por lo tanto, se aprecia una gran diferencia respecto de la ley española, tanto en el tiempo de seguridad como en la duración de la libertad vigilada, la cual hacen de la prisión permanente revisable una medida punitiva más humana respecto de la española.

B) Legislación italiana

El CP italiano contempla la pena de prisión permanente, denominada *“l’ergastolo”*, que vino a sustituir a la pena de muerte. Además, esta pena, de acuerdo al art. 22 CP italiano⁸⁵, es cumplida en centros penitenciarios exclusivos para este tipo de reos. Se trata de una pena a perpetuidad pero revisable en un periodo de veintiséis años. Con lo cual, en Italia las condiciones de esta pena son más duras que en España, ya que el cumplimiento en centros exclusivos para los condenados a esta pena produce un aislamiento y exclusión plena de la sociedad, además de tener una duración excesiva el periodo de seguridad.

-
1. nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden wiedergutzumachen,
 2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zu zahlen, wenn dies im Hinblick auf die Tat und die Persönlichkeit des Täters angebracht ist,
 3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen oder
 4. einen Geldbetrag zugunsten der Staatskasse zu zahlen.

2 Eine Auflage nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 soll das Gericht nur erteilen, soweit die Erfüllung der Auflage einer Wiedergutmachung des Schadens nicht entgegensteht.

(3) Erbietet sich der Verurteilte zu angemessenen Leistungen, die der Genugtuung für das begangene Unrecht dienen, so sieht das Gericht in der Regel von Auflagen vorläufig ab, wenn die Erfüllung des Anerbietens zu erwarten ist”. ((1) El tribunal puede imponer al condenado obligaciones que sirvan para la reparación del injusto cometido. Sin embargo, el tribunal no puede colocarle exigencias imposibles al condenado. (2) El tribunal puede imponerle al condenado: 1. reparar de acuerdo con sus posibilidades los daños causados por el hecho, 2. pagar una suma de dinero a favor de una institución pública sin ánimo de lucro, cuando esto en virtud del hecho y de la personalidad del autor es apropiado, 3. o si no, prestar servicios de utilidad pública 4. pagar una suma de dinero a favor de la erario público. Una obligación de acuerdo con la frase primera numeral 2 a 4 sólo la impone el tribunal en tanto que el cumplimiento de la obligación no impida la reparación de los perjuicios. (3) Si el condenado se ofrece a prestaciones adecuadas que sirvan a la reparación del injusto cometido, entonces el tribunal puede prescindir provisionalmente, por regla general, de las obligaciones, cuando es de esperar el cumplimiento del ofrecimiento).

⁸⁴ § 57a apartados 3 y 4 StGB : “((3) 1 Die Dauer der Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. 2 § 56a Abs. 2 Satz 1 und die §§ 56b bis 56g, 57 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 gelten entsprechend.

(4) Das Gericht kann Fristen von höchstens zwei Jahren festsetzen, vor deren Ablauf ein Antrag des Verurteilten, den Strafreis zur Bewährung auszusetzen, unzulässig ist”.

⁸⁵ Art. 22 CP italiano: “La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto”. (La pena de prisión se extiende de quince días a veinticuatro años, y se descuenta en uno de los establecimientos destinados a ello, con la obligación de trabajar y con aislamiento nocturno. La persona condenada a prisión, que ha cumplido al menos un año de la sentencia, puede ser admitida para trabajar al aire libre).

El CP italiano exhibe su dureza al contemplar los supuestos sobre los que le es aplicable dicha pena, pero de forma única⁸⁶, y en cuanto a su revisión. En lo que respecta a los supuestos, se contempla en el art. 576 CP italiano⁸⁷ aplicándose para el asesinato y los delitos de homicidio con alguna agravante como la premeditación, parentesco, o como medio para escapar de la prisión o detención; y en los denominados “delitos contra la personalidad del Estado” contemplados en los art. 241, 242, 243 y 244 CP italiano⁸⁸; o, según los arts. 438 y 439 CP italiano⁸⁹, algunos delitos contra la salud

⁸⁶ TAMARIT SUMALLA, J.M “la prisión permanente revisable”. *Grandes Tratados. Comentario a la reforma penal de 2015*. Aranzadi, 2015. P. 4-5.

⁸⁷ Art. 576 CP italiano: “*Si applica la pena dell'ergastolo (2) se il fatto preveduto dall'articolo precedente commesso:*

1. *col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;*
2. *contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;*
3. *dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;*
4. *dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;*
5. *in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
- 5.1 *dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.*
- 5 bis. *contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.*

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.” (La cadena perpetua se aplica si se cumple el hecho previsto en el artículo anterior: 1. con la concurrencia de algunas de las circunstancias indicadas en n. 2 del artículo 61; 2. contra el ascendente o el descendiente, cuando se trata de alguna de las circunstancias indicadas en los números 1 y 4 del artículo 61, o cuando se utiliza un medio venenoso u otro medio insidioso, o cuando hay una premeditación; 3. del fugitivo, para evitar el arresto, la captura o el encarcelamiento o para obtener los medios de subsistencia durante la fuga; 4. del criminal asociado, para evitar el arresto, captura o encarcelamiento; 5. con ocasión de la comisión de algunos de los delitos previstos en los artículos 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater y 609-octies; 5.1) del autor del delito previsto en el artículo 612-bis contra la misma persona ofendida. 5-bis) contra un oficial o agente de la policía judicial, o un oficial o agente de seguridad pública, en el acto o debido al cumplimiento de las funciones o el servicio. Es fugitivo, a los efectos de la ley penal, quien se encuentra en las condiciones indicadas en el n. 6 del Artículo 61).

⁸⁸ Art. 241CP italiano: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.*” (A menos que el acto constituya un delito más grave, todo aquel que lleve a cabo actos violentos directos e idóneos para someter el territorio del Estado o parte de él a la soberanía de un Estado extranjero o socavar la independencia o la unidad del Estado será sancionado con encarcelamiento de no menos de doce años. La pena se agrava si el hecho se comete con la violación de los deberes inherentes al ejercicio de funciones públicas).

Art. 242.1 y 2 CP italiano: “*Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo . Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte. Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.*” (Un ciudadano que porta armas contra el Estado o sirve en las fuerzas armadas de un Estado en guerra con el Estado italiano es castigado con cadena perpetua. Si él ejerce un comando superior o una función directiva, es castigado con la muerte. No es punible que, encontrándose a sí mismo, durante las hostilidades, en el territorio del Estado enemigo, haya cometido el hecho de haber sido obligado por una obligación impuesta por las leyes del mismo Estado).

pública. Aunque en los artículos se contemple la pena de muerte está abolida por Real Decreto n. 224/1944.

En cuanto a la revisión de la pena de prisión permanente revisable, hay que atender al art. 176 CP italiano⁹⁰, que establece como requisito un periodo de seguridad de 26 años para acceder a la libertad vigilada y en todo momento demostrar el arrepentimiento, es decir, que haya una reinserción del penado. En ningún caso podrá superar los 30 años⁹¹.

El Tribunal Constitucional italiano ha considerado, al igual que el TC alemán y español, que la pena es multifuncional y, por tanto, la función de reeducación y reinserción social no es la finalidad exclusiva de la pena, sino que también se compone de la función de disuasión, de prevención general negativa y de defensa social, que son inherentes al poder punitivo del Estado. Además, la posibilidad de revisión de la pena,

Art. 243 CP italiano: “*Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo*”(Cualquiera que mantenga información de inteligencia con el extranjero para que un Estado extranjero pueda hacer la guerra o realizar actos de hostilidad contra el Estado italiano, o cometer otros actos destinados al mismo fin, será castigado con una pena de prisión de no menos de diez años. Si la guerra sigue, se aplica la pena de muerte; si se producen hostilidades, se aplica la cadena perpetua).

Art. 244.1 CP italiano: “*Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo*.” (Quien, sin la aprobación del Gobierno, se alista o realiza otros actos hostiles contra un Estado extranjero, a fin de exponer al Estado italiano al peligro de la guerra, es castigado con una pena de prisión de seis a dieciocho años; si ocurre la guerra, se castiga con cadena perpetua).

⁸⁹ Art 438 CP italiano: “*Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte*.” (Cualquier persona que causa una epidemia a través de la propagación de gérmenes patógenos es castigada con cadena perpetua. Si la muerte de varias personas resulta del acto, se aplica la pena de muerte).

Art. 439 CP: “*Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte*.” (Toda persona que envenene agua o sustancias destinadas a la alimentación, antes de que sean extraídas o distribuidas para su consumo, será castigada con una pena de prisión no inferior a quince años. Si la muerte de alguien se deriva del hecho, se aplica la cadena perpetua; y, en caso de muerte de varias personas, se aplica la pena de muerte).

⁹⁰ Art. 176 CP italiano: “*Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento,(...) Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle*”. (La persona condenada a prisión que, durante el tiempo de la ejecución de la sentencia, se ha arrepentido, (...) El condenado a cadena perpetua puede ser liberado condicional cuando ha cumplido al menos veintiséis años de castigo. La concesión de la libertad condicional está sujeta al cumplimiento de las obligaciones civiles derivadas del delito, a menos que el condenado demuestre que no puede cumplirlas).

⁹¹ ALONSO SANDOVAL, T. “El marco internacional, comparado y español de la pena de cadena perpetua”, Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2015, p. 734.

de acuerdo con el TC italiano, le quita su carácter perpetuo y es suficiente para que se le reconozca su legitimidad constitucional⁹².

C) Legislación francesa

En el Derecho francés se prevé desde 1994 la denominada “reclusión a perpetuidad” en el art. 131-1 CP francés⁹³, que, como en los anteriores casos analizados, la pena atiende a diferentes fines, como la seguridad ciudadana, el castigo al culpable y la reinserción del condenado en la sociedad.

Se establecen en los arts. 221⁹⁴, 222-6⁹⁵, 222-26⁹⁶ y 211-1 y 2 CP francés⁹⁷ una serie de supuestos en los que se impondrá la pena de cadena perpetua que engloban el

⁹² PEDROLI SERRETTI, A. “Derecho penal del enemigo: análisis de un modelo político-criminal”, Tesis Doctoral, *Universidades de Salamanca/Salerno*, 2017, p. 829-830.

⁹³ Art. 131-1. 1° CP francés: “*Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité*”. (Las sanciones penales contraídas por personas físicas son: 1° prisión criminal o detención penal de por vida).

⁹⁴ Art. 221-2 CP francés: “*Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article*”. (El asesinato que precede, acompaña o sigue a otro crimen se castiga con la cadena perpetua. El homicidio con el objetivo de preparar o facilitar un delito o facilitar el escape o garantizar la impunidad del autor o cómplice de un delito puede castigarse con cadena perpetua. Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relacionados con el período de seguridad se aplicarán a los delitos previstos en este artículo).

Art. 221-3 CP francés: “*Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce*.” (El homicidio cometido con premeditación o emboscada es un asesinato. Es castigado con cadena perpetua. Los primeros dos párrafos de la sección 132-23 relacionados con el período de seguridad se aplican a la ofensa prevista en esta sección. Sin embargo, cuando la víctima es menor de quince años y el asesinato está precedido o acompañado de violación, tortura o barbarie o cuando el asesinato fue cometido contra un magistrado, un oficial de policía nacional, miembro de la gendarmería, miembro del personal de la administración penitenciaria o cualquier otra persona a cargo de la autoridad pública, con ocasión del ejercicio o debido a sus funciones, el tribunal de acusación puede, por decisión especial, ya sea para ampliar el período de seguridad a treinta años, o, si se pronuncia cadena perpetua, para decidir que ninguna de las medidas enumeradas en el artículo 132-23 puede otorgarse a la persona condenada; en el caso de la conmutación de la sentencia, y salvo que el decreto de indulto disponga lo contrario, el período de seguridad será igual a la duración de la condena resultante del indulto).

Art. 221-4 CP francés: “*Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;*

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° et 7° (abrogés)

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce". (El homicidio será castigado con reclusión criminal perpetua cuando se cometa:

1° Contra un menor de quince años ;

2° Contra un ascendiente legítimo o natural o contra el padre o madre adoptivos ;

3° Contra una persona cuya especial vulnerabilidad, debido a su edad, enfermedad invalidez, deficiencia física o psíquica o a su estado de gestación, sea aparente o conocida por su autor ;

4° Contra un magistrado, jurado, abogado, agente público o ministerial, militar de la gendarmería nacional, funcionario de la policía nacional, de aduanas, de la administración penitenciaria o cualquier otra persona depositaria de la autoridad pública, un bombero profesional o voluntario, un vigilante jurado de inmuebles o de un grupo de inmuebles o un agente que ejerza por cuenta de un arrendador las funciones de guardia o vigilancia de inmuebles destinados a habitación en aplicación del artículo L. 127-1 del código de la construcción y de la habitación, en el ejercicio o por causa de sus funciones, cuando la calidad de la víctima sea aparente o conocida por el autor ;

4° bis Contra el cónyuge, los ascendientes y descendientes en línea directa de las personas mencionadas en el n° 4° o contra cualquier otra persona que viva habitualmente en su domicilio, en razón de las funciones ejercidas por esas personas ;

4° ter Contra un agente de un explotador de una red de transporte público de viajeros o cualquier otra persona encargada de una misión de servicio público, así como contra un profesional de la sanidad en el ejercicio de sus funciones, cuando la calidad de la víctima sea aparente o conocida por el autor ;

5° Contra un testigo, una víctima o una parte civil, bien para impedirle denunciar los hechos, presentar una querrela o prestar declaración, o bien por motivo de su denuncia, de su querrela o de su declaración ;

6° En razón de la pertenencia o de la no pertenencia, cierta o supuesta, de la víctima a una determinada etnia, nación, raza o religión ;

7° En razón de la orientación sexual de la víctima ;

8° Por varias personas que actúen en banda organizada ;

9° Por el cónyuge o la concubina de la víctima o la pareja relacionada con la víctima mediante un pacto de solidaridad civil ;

homicidio, terrorismo, crímenes contra la humanidad, torturas, espionaje, seguridad del Estado, delitos relacionados con el tráfico de drogas, otros delitos que produzca la pérdida de la vida de la víctima y el asesinato según las circunstancias del hecho delictivo.

10 ° contra una persona por su negativa a contraer matrimonio o celebrar una unión.

Los dos primeros párrafos del artículo 132-23 relacionados con el período de seguridad se aplicarán a los delitos previstos en este artículo. Sin embargo, cuando la víctima es menor de quince años y el asesinato está precedido o acompañado de violación, tortura o barbarie o cuando el asesinato fue cometido por una pandilla organizada contra un magistrado, un funcionario del policías nacionales, un miembro de la gendarmería, un miembro del personal de la administración penitenciaria o cualquier otra persona a cargo de la autoridad pública, con ocasión del ejercicio o debido a sus funciones, el Tribunal Assize puede por decisión especial, ya sea para ampliar el período de seguridad a treinta años o, si impone cadena perpetua, para decidir que ninguna de las medidas enumeradas en el artículo 132-23 puede otorgarse a la persona condenada; en el caso de la conmutación de la sentencia, y salvo que el decreto de indulto disponga lo contrario, el período de seguridad será igual a la duración de la condena resultante del indulto).

Art. 221-5 CP francés: “*Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article*”. (Atacar las vidas de otros mediante el uso o la administración de sustancias que pueden provocar la muerte es una intoxicación. El envenenamiento se castiga con treinta años de prisión criminal. Es punible con cadena perpetua cuando se cometa en una de las circunstancias establecidas en las secciones 221-2, 221-3 y 221-4. Los primeros dos párrafos de la sección 132-23 relacionados con el período de seguridad se aplican a la ofensa prevista en esta sección).

⁹⁵ Art. 222-6 CP francés: “*L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner*”. (La infracción definida en la sección 222-1 se castiga con la cadena perpetua, que dio como resultado la muerte de la víctima sin la intención de dársela).

⁹⁶ ART. 222-26 CP francés: “*e viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie*”. (la violación se castiga con cadena perpetua cuando va precedida, acompañada o seguida de tortura o actos de barbarie).

⁹⁷ Art. 211-1CP francés: “*Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :*

- *atteinte volontaire à la vie ;*
- *atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;*
- *soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;*
- *mesures visant à entraver les naissances ;*
- *transfert forcé d'enfants.*

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité”. (Constituye un genocidio en la ejecución de un plan concertado para la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o de un grupo determinado por cualquier otro criterio arbitrario, para cometer o cometer cualquiera de los siguientes actos contra miembros de este grupo: - ataque voluntario a la vida; - lesiones graves a la integridad física o mental; - sumisión a las condiciones de existencia que puedan resultar en la destrucción total o parcial del grupo; - medidas para prevenir nacimientos; - transferencia forzada de niños. El genocidio se castiga con la cadena perpetua).

Art. 211-2 CP francés: “*La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet*”. (La provocación pública y directa, por cualquier medio, para cometer genocidio se castiga con cadena perpetua si esta provocación ha sido seguida por el efecto).

El período de seguridad se establece, según el precepto 132-23 del CP francés⁹⁸, en 18 años⁹⁹. Al igual que el CP alemán, se comprueba que en este caso se intenta que el recluso no sufra los efectos de institucionalización y se permita la reinserción. Ello es así al establecer un periodo de revisión de 15 años que oscila entre los 15 y 20 años que parte de la doctrina, como DAUNIS RODRÍGUEZ, entiende conveniente para que sea una condena ajustada al principio de humanidad de las penas. No obstante, el tribunal podrá aumentarlo hasta veinte años, o bien decidir su reducción. Por lo tanto, se observa una tendencia a la individualización de las penas y a la reinserción del reo, ya que permite al Tribunal reducir las condenas teniendo en cuenta la evolución psicológica y personal del reo¹⁰⁰.

En Francia la revisión consistirá en un período de observación de hasta un año, un régimen de semilibertad hasta dos años, y una libertad vigilada hasta un máximo de cinco años¹⁰¹. Al régimen general existen excepciones en el precepto 720-1-1 CPP francés¹⁰² como la reducción de pena de cinco años en caso de colaborar con la justicia,

⁹⁸ Art. 132- 23 apartado 2 CP francés: “*La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées*”, (La duración del período de seguridad es la mitad de la sentencia o, en el caso de cadena perpetua, dieciocho años. El tribunal de justicia o el tribunal pueden, sin embargo, por decisión especial, extender estos términos a dos tercios de la sentencia o, en el caso de una sentencia de cadena perpetua, hasta veinte - dos años, o deciden reducir estas duraciones).

⁹⁹ ALONSO SANDOVAL, T. “El marco internacional...”, op., cit., p. 816.

¹⁰⁰ PINEDO ELIZONDO, L. “La prisión permanente revisable en España” TFM, Universidad de Alcalá de Henares, 2017, p. 39.

¹⁰¹ Ídem, p. 39.

¹⁰² Art. 720-1-1 CPP francés: “*Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement.*

La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.(...)

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance.

La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de

así como la posibilidad de suspensión de la ejecución de la condena en caso de enfermedad grave. Por otro lado, el precepto 720-4 CPP francés¹⁰³ contempla la

même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.

Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article”.

(Salvo en el caso de grave riesgo de reproducción de la infracción, la suspensión podrá igualmente ordenarse, cualquiera que sea la naturaleza de la pena o la duración de la pena restante, y por una duración que no tiene que ser determinada, para los condenados respecto de los que se ha diagnosticado que están aquejados de una patología que compromete el pronóstico vital o que su estado de salud es permanentemente incompatible con el mantenimiento del internamiento, fuera de los casos de hospitalización de personas internadas en establecimientos de salud por trastornos mentales.

La suspensión no podrá ser ordenada salvo si dos dictámenes médicos distintos establecieran de forma concordante que el condenado se halla en una de las situaciones enunciadas en el párrafo precedente. (...) En los demás casos, la suspensión será dictada por el tribunal que aplicó las penas según las modalidades previstas en el artículo 712-7.

El tribunal que acuerde una suspensión de la pena en aplicación de las disposiciones del presente artículo podrá decidir someter al condenado a una o varias de las obligaciones o prohibiciones previstas por los artículos 132-44 y 132-45 del código penal.

El juez que aplicó las penas podrá ordenar en cualquier momento un dictamen médico con respecto a un condenado que se haya visto beneficiado por una medida de suspensión de la pena en aplicación del presente artículo y ordenar que se ponga fin a la suspensión si las condiciones de ésta ya no se cumplen. Se actuará de la misma manera si el condenado no respetara las obligaciones que le fueron impuestas en aplicación de las disposiciones del párrafo precedente. La decisión del juez que aplicó las penas se adoptará según las modalidades previstas por el artículo 712-6.

Si la suspensión de la pena hubiera sido ordenada por una sentencia dictada en un asunto criminal, cada seis meses deberá producirse un dictamen médico destinado a verificar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión.

Las disposiciones del artículo 720-2 no son aplicables cuando sean de aplicación las disposiciones del presente artículo).

¹⁰³ Art. 720-4 CPP francés: “*Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.*

Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps”. (Cuando el condenado presentara problemas serios de readaptación social, el tribunal de aplicación de las penas podrá, excepcionalmente y en las condiciones previstas por el artículo 712-7, decidir concluir con el periodo de seguridad previsto por el artículo 132-23 del código penal o que su duración sea reducida. Sin embargo, cuando la el tribunal de apelación, hubiera decidido incrementar el periodo de seguridad a treinta años en aplicación de las disposiciones del último párrafo de los artículos 221-3 y 221-4 del código penal, el tribunal de aplicación de las penas no podrá reducir la duración del periodo de seguridad o darle

posibilidad de sustitución de la pena de prisión permanente revisable por pena de prisión de 30 años en casos de que por problemas psicológicos del condenado impidan o se ponga en riesgo la convivencia en prisión con otros reos.¹⁰⁴

D) Legislación austriaca:

La prisión perpetua en Austria se contempla para veintisiete supuestos. De todos ellos solamente es absoluta, es decir, no es posible otro castigo, para el genocidio contemplado en el § 321 apartado 1 CP austriaco, algunas modalidades de crímenes contra la humanidad regulados en el § 321a apartados 1 y 2 CP austriaco y la modalidad del § 321b apartado 1 CP austriaco de crímenes de guerra contra las personas.

Para el resto de delitos el tribunal deberá decidir en cada caso concreto si imponer la pena de prisión perpetua o una pena privativa de libertad de 10 a 20 años. SAUTNER entiende que pueden clasificarse estos delitos en tres grupos¹⁰⁵:

El primer grupo lo conforman algunos delitos dolosos. Se trata del asesinato (§ 75 CP), la producción y difusión de armas de destrucción masiva (§ 177a párr. 2 CP), un supuesto dentro de los crímenes contra la humanidad (§ 321a párr. 3 CP), algunos supuestos de crímenes de guerra contra personas (§ 321b párr. 2 y 3 CP), algunos tipos cualificados de tráfico de drogas (§ 28a párr. 5 Ley de Sustancias Adictivas³) así como algunos supuestos de reactivación del nacionalsocialismo (§§ 3a, 3e párr. 1, § 3 Ley de la Proscripción⁴). No todos estos delitos implican la causación de la muerte de una persona.

El segundo grupo de delitos lo conforman aquellas conductas en las que se produce la muerte de una persona como consecuencia imprudente de un delito doloso previo. En este grupo se encuentran el secuestro con extorsión (§ 102 párr. 3 CP), el robo grave (§ 143 CP), la violación (§ 201 párr. 2 CP), la coacción sexual (§ 202 párr. 2 CP), el abuso sexual (§ 205 párr. CP), el abuso sexual (grave) de menores (§ 206 párr. 3, § 207 párr. 3 CP) así como la tortura (§ 312a párr. 2 CP).

fin si el condenado no ha cumplido antes un encarcelamiento de una duración al menos igual a veinte años. En el caso en que el tribunal de apelación hubiera decidido que no podrá ser acordada ninguna de las medidas enumeradas en el artículo 132-23 del código penal con respecto al condenado a reclusión criminal a perpetuidad, el tribunal de aplicación de las penas, no podrá acordar una de estas medidas salvo si el condenado hubiera cumplido un encarcelamiento de una duración al menos igual a treinta años. Las decisiones previstas por el párrafo precedente no podrán ser dictadas hasta que se haya realizado un dictamen elaborado por un colegio de tres peritos médicos inscritos en la lista de expertos admitidos ante el Tribunal de casación, que se pronunciarán sobre el estado de peligrosidad del condenado. Por derogación de las disposiciones del tercer párrafo del artículo 732, el tribunal de aplicación de las penas podrá dictar medidas de asistencia y de control sin limitación en el tiempo).

¹⁰⁴ RÍOS MARTÍN, J.C. “La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad”, *Eds Gakoa*, 2013, p. 60.

¹⁰⁵ SAUTNER, L. “La prisión perpetua en Austria: significado en el sistema penal y valoración constitucional y político-criminal”, *Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma de 2015*, Dykinson, Madrid, 2016, p. 75.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8rGxDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=%22prision+perpetua+en+austria%22&ots=84RzyqNY1P&sig=yt0t49Nm2c0hFZQySzHh8VvzBT4#v=onepage&q&f=false>.

El tercer grupo de delitos que prevén una pena de prisión de duración limitada como alternativa a la pena de prisión perpetua, se caracteriza por la causación de la muerte imprudente de un número elevado de personas como consecuencia de un hecho doloso previo. En este grupo se encuentran el incendio (§ 169 párr. 3 CP), la puesta en peligro dolosa a través de energía atómica o radiaciones ionizantes (§ 171 párr. 2 CP), la puesta en peligro dolosa a través de explosivos (§ 173 párr. 2 CP), la puesta en peligro colectiva dolosa (§ 176 párr. 2 CP), el manejo no autorizado de material nuclear, radiactivo o de equipamiento de radiaciones (§ 177b párr. 4 CP), el atentado doloso contra el medio ambiente (§ 180 párr. 2 CP), el manejo o transporte de desechos doloso que suponga peligro para el medioambiente (§ 181b párr. 2 CP), la gestión dolosa de instalaciones que pongan en peligro el medioambiente (§ 181d párr. 2 CP), la piratería por aire (§ 185 párr. 2 CP), la puesta en peligro dolosa de la seguridad del tráfico aéreo (§ 186 párr. 3 CP) así como el robo en el mar (§ 45 párr. 2 de la Ley sobre el Tráfico Marítimo).

Respecto de la libertad condicional, una vez obtenida, el condenado contará con asistentes sociales durante tres años, tal y como establece el §50 apartado 2.4 y 3 CP austriaco¹⁰⁶. Par su obtención, se establecen los requisitos en el §46 apartado 6 CP austriaco¹⁰⁷ de haber cumplido un periodo de seguridad de quince años y tener un pronóstico favorable de reinserción. El periodo de prueba de libertad condicional, establecido en el § 48 apartado 1 CP austriaco¹⁰⁸, es de diez años. Excepcionalmente, el §53 apartado 4 CP austriaco¹⁰⁹ prorroga el plazo tres años más, pudiendo ampliarse continuamente y de por vida¹¹⁰.

¹⁰⁶ §50 apartado 2.4 y 3 CP austriaco: “(2.4) *Bewährungshilfe ist stets anzuordnen, wenn ein Verurteilter (...) aus lebenslanger Freiheitsstrafe bedingt entlassen wird. In den Fällen der Z 1 bis 2 ist von der Anordnung der Bewährungshilfe nur abzusehen, wenn nach der Art der Tat, der Person des Rechtsbrechers und seiner Entwicklung angenommen werden kann, dass er auch ohne eine solche Anordnung keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde.* (3) *Weisungen sowie die Anordnung der Bewährungshilfe gelten für die Dauer des vom Gericht bestimmten Zeitraums, höchstens jedoch bis zum Ende der Probezeit, soweit sie nicht vorher aufgehoben oder gegenstandslos werden. (...) 2 Z 4 zumindest für die ersten drei Jahre nach der Entlassung anzuordnen*” (La asistencia de libertad condicional debe ordenarse siempre si un condenado (...) a cadena perpetua es puesto en libertad condicional. (3) Las instrucciones y órdenes de asistencia se aplicaran durante el periodo determinado por el Tribunal, pero como máximo hasta el final del periodo de prueba, salvo que se hayan revocado previamente o no sean necesarias. (...) en el caso del 2.4 se ordenará durante los tres primeros años de la obtención de la libertad condicional)

¹⁰⁷ §46 apartado 6 CP austriaco: “*Ein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilter darf nur bedingt entlassen werden, wenn er mindestens fünfzehn Jahre verbüßt hat und anzunehmen ist, dass er keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde.* (Una persona condenada a cadena perpetua solamente puede ser liberada condicionalmente si ha cumplido 15 años de prisión y se cree que no va a cometer más actividades criminales).

¹⁰⁸ § 48 apartado 1 in fine CP austriaco: “*Bei der bedingten Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe beträgt die Probezeit 10 Jahre*”. (el periodo de prueba de la libertad condicional en la cadena perpetua es de 10 años).

¹⁰⁹ §53 apartado 4 CP austriaco: “*Bestehen gegen Ende der ursprünglichen oder verlängerten Probezeit nach bedingter Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder aus einer Freiheitsstrafe wegen einer strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung von mehr als fünf Jahren sonst besondere Gründe zur Annahme, dass es einer weiteren Erprobung des Rechtsbrechers bedarf, so kann das Gericht die Probezeit um höchstens drei Jahre verlängern. Eine wiederholte Verlängerung ist zulässig*”. (Al final del periodo de prueba original o prorrogado tras la libertad condicional de una cadena perpetua o de una pena de prisión por un delito contra la integridad sexual y la autodeterminación penado

Además, la pena a partir de los quince años de cumplimiento está sujeta a revisión durante su ejecución, pero, como ocurre en España, los criterios utilizados en el pronóstico de reinserción son arbitrarios¹¹¹.

3.2 ESTUDIO DE LAS TASAS DE CRIMINALIDAD Y DURACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE LARGA DURACIÓN EN EUROPA

Una vez realizado el repaso de las legislaciones imperantes en Europa, analizaré las estadísticas sobre delincuencia en Europa, la población reclusa y el índice de reincidencia. Se trata de analizar si la pena de prisión permanente revisable es una pena necesaria en nuestro ordenamiento jurídico y si los argumentos del legislador en el Preámbulo de la LO 1/2015, 30 de marzo, se ajustan a la realidad social. Para ello he utilizado los gráficos enumerados en el Anexo I.

En primer lugar, como se puede comprobar en el gráfico 1 del Anexo I¹¹², España se sitúa en la Unión Europea como el segundo de los países con menor tasa de criminalidad, sólo por encima Austria.

Por lo tanto, muchos de los países que ya contemplaban la pena a perpetuidad con revisión tienen una tasa de criminalidad mayor que la de España. Solo es menor la tasa de criminalidad de Austria, la cual contempla una pena de prisión perpetua revisable pasados los 15 años y unas condiciones de reinserción del penado a la libertad mucho más favorables que las españolas.

De hecho, contemplando el gráfico 2 del Anexo I¹¹³, en España se aprecia como la tasa de criminalidad ha bajado desde el 2008, cuando aún no estaba vigente la pena de prisión permanente revisable. Como indica el Ministerio del Interior, la disminución sí afectó a los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 3,3% en el periodo de 2015-2016 y logrando reducirlo desde 2005 hasta el 2016 en un 40%.

con 5 años, el tribunal puede acordar por razones especiales la ampliación por un máximo de 3 años el periodo de prueba. Se permite una ampliación repetida).

¹¹⁰ SAUTNER, L “La prisión perpetua en Austria..., op., cit, p. 78.

¹¹¹ SAUTNER, L “La prisión perpetua en Austria..., op., cit, p. 79.

¹¹² Gráfico 1: Tasa de homicidios de la UE en 2014. Fuente: Ministerio del Interior. http://www.interior.gob.es/documents/10180/6865255/Presentacion+ministro_Balance+de+Criminalidad+2016.pdf

¹¹³ Gráfico 2: Tasa de criminalidad de España en 2016. Fuente: Departamento de Seguridad, Gobierno de España. <http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/estadisticas-criminalidad-espana-2016>

Por lo tanto, entiendo que la introducción de la pena de prisión permanente revisable en España no ha supuesto el efecto de prevención general negativa, ya que se la tasa de criminalidad ha disminuido tendentemente desde hace más de 10 años. Por lo tanto, considero que no es real la necesidad de aplicar este tipo de pena y la legislación española se debe acoger al principio de subsidiariedad por el cual se debe buscar el medio menos lesivo.

Como he analizado, la tasa de criminalidad desde 2008 ha continuado descendiendo, mientras que la seguridad ciudadana se encuadra como uno de los principales problemas que existen en España, aumentando en el último cuatrimestre¹¹⁴. Por lo tanto, la alarma social y el sentimiento de la ciudadanía de un aumento de la criminalidad y de la necesidad de este tipo de medidas tan restrictivas de Derechos fundamentales no es real. Como analiza ROIG TORRES, de las encuestas, como la Encuesta social Europea o informes del Observatorio de justicia, se deduce que la población entiende que la Justicia no está funcionando bien, pero se debe también a la influencia de los medios de comunicación, pues el 81% de la población conoce dicho funcionamiento a través de la prensa y televisión.¹¹⁵ Por lo tanto, de acuerdo con la citada profesora, no se está cumpliendo con el fundamento descrito en el Preámbulo de la LO 1/2015 de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia, debiendo objetivar la conciencia y opinión de la ciudadanía.

Para completar el análisis se debe hacer referencia a la población reclusa de la UE. Se constata que España es uno de los países con menor tasa de criminalidad, aunque es uno de los que mayor población reclusa contiene. Se debe a que es un país con penas de larga duración, es el caso del límite de 40 años de cumplimiento efectivo de prisión por concurso de delitos, siendo muy superior a las penas impuestas en los países de la UE en los cuales nuestro legislador se ha inspirado.

Como se observa en los gráficos 3 y 4 del anexo I¹¹⁶, la tendencia en la mayoría de los países de la UE es que se incremente la población reclusa, aumentando en este

¹¹⁴ Principales problemas de la sociedad española. Informe del Centro de investigaciones sociológicas. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html

¹¹⁵ ROIG TORRES, M. “coste de la prisión...”, op., cit., p. 3.

¹¹⁶ Gráfico 3: Población reclusa, 2002-2012. Fuente: Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Prison_population_2002%E2%80%932012_YB14.png

Gráfico 4: Tabla comparativa de población reclusa promedio anual, 2007-2009 y 2010-2012(por 100.000 habitantes). Fuente: European Statistics (Eurostat). <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics->

periodo un 7% (los datos contemplan los condenados adultos y jóvenes, y los que están en prisión provisional a la espera de un juicio. Están excluidos los reclusos no penales encarcelados por razones administrativas, como la investigación de la situación migratoria)¹¹⁷.

Como se constata, Austria el país con menos criminalidad de la Unión Europea, goza de una población reclusa muy por debajo de la española, italiana, alemana y francesa. Además, como ya se comprobó anteriormente, en Austria el periodo de seguridad de la pena de prisión permanente son 15 años, por debajo de las aplicadas en España, Italia, Alemania y Francia, y rige un buen sistema de reinserción y rehabilitación de los condenados.

En España, analizando los gráficos 5 y 6 del anexo I¹¹⁸, se comprueba que, desde la introducción en 2015 de la pena de prisión permanente revisable, la población reclusa ha descendido, aunque esta tasa, en comparación con la tasa de criminalidad en España, es superior a la media de Europa. Por lo que sus defensores utilizaran el argumento de la prevención, por el cual se produce un efecto miedo a delinquir ante penas tan superiores, pero, como hemos visto, se debe a que la tasa de criminalidad ha disminuido.

En mi opinión, se debería centrar el legislador no en tener unas penas tan elevadas que produzcan unos efectos irreparables en la vida del recluso, sino tratar de que no reincida el penado. Además, el esfuerzo y el coste económico que conlleva la pena de prisión permanente revisable es muy elevado, se entiende que cada preso tiene un coste mensual de 1.950€ multiplicado por los 25 años de prisión del periodo de seguridad, además del estricto régimen de permisos de salida¹¹⁹. Por lo tanto, debería ser utilizado para crear sistemas de reinserción mejores y políticas de prevención que no sean tan limitativas de derechos y libertades fundamentales¹²⁰.

explained/index.php?title=File:Prison_population_average_per_year_2007%E2%80%932010%E2%80%932014.png

¹¹⁷ Informe de la Comisión de la UE, European statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Crime_statistics/es

¹¹⁸ Gráficos 5 y 6: Tasas de población reclusa 2015 y 2018. Fuente: instituciones penitenciarias. <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html>

¹¹⁹ ROIG TORRES, M. “Coste de la prisión...”, op., cit., p. 1-2.

¹²⁰ SERRANO TÁRRAGA, M.D. “La prisión perpetua revisable” *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, n° 25, Madrid, 2012, p. 184. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/660085/RJ25_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

De este modo, se comprueba que no existen datos accesibles acerca de la tasa de reincidencia en España, sí respecto de Cataluña. Extrapolando estos datos a España, comprobamos en el gráfico 7 del anexo I¹²¹, que ha bajado la reincidencia en 2014 respecto del último estudio del CEJFE en 2008 en 10 puntos porcentuales, es decir, el 70% de los presos no reincide¹²².

Por último, los delitos que priman en España son delitos contra la propiedad y tráfico de drogas, estimando que son el 80% de los condenados, mientras que los delitos contra las personas son mucho menos en comparación a los países de Europa occidental. A lo que hay que añadir que los delitos contra las personas gozan de una reincidencia menor¹²³, haciendo visible, nuevamente, que esta medida punitiva es innecesaria en nuestro ordenamiento jurídico. Además, se comprueba que influye positivamente para evitar la reincidencia, según un estudio de Villacampa/Torres/Luque, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad o reglas de conducta asociadas a la suspensión condicional de una pena privativa de libertad¹²⁴.

IV. CONCLUSIONES FINALES

PRIMERA. El fin de la pena no es exclusivamente la reinserción. La política criminal atiende a diversas funciones de seguridad, prevención y retribución. El problema de ello es priorizar otros intereses antes que la principal finalidad de la pena, ya que para poder frenar la criminalidad se necesita reinserción y, por lo tanto, los mecanismos mejores para que ello se produzca. Conforme a ello, la doctrina entiende que para la reinserción efectiva y evitar los efectos adversos de la prisión el tiempo estimado debe ser sobre los 15 años.

SEGUNDA. España cuenta con unas penas privativas de libertad que son muy elevadas respecto de los países europeos en los que se inspira. Por lo tanto, se está ante

¹²¹ Gráfico 7: Tabla comparativa de la tasa de reincidencia de Cataluña en 2014 con estudios anteriores. Fuente: CEJFE.

¹²² CEJFE “Tasa de reincidencia penitenciaria 2014”, Cataluña, 2015, p. 131. http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2015/taxa_reincidencia_2014/tasa_reincidencia_2014_cast.pdf

¹²³ TAMARIT SUMALLA, J.M. “Política criminal con bases empíricas en España”. Revista de Política Criminal nº 3, 2007, p. 8.

¹²⁴ TAMARIT SUMALLA, J.M. “Política criminal...”, op., cit., Pág. 9.

una medida innecesaria y desproporcional si se utiliza el argumento del reflejo de los países Europeos.

En primer lugar porque para implantar este tipo de medida habría que revisar el resto de penas, ya que son excesivamente largas. Ha quedado comprobado en el análisis de las legislaciones de la UE. Se aprecia como en Alemania la pena de prisión no perpetua como máximo son 15 años, mientras que en España oscila entre los 20 y 40 años. Es decir, estamos ante una diferencia de hasta 25 años.

En segundo lugar, las penas tan elevadas provocan que la tasa de reclusos sea muy alta en comparación al índice de criminalidad en España. Ello supone que la reinserción es más difícil y se produce la institucionalización de los condenados.

TERCERA. Queda desmontando el argumento de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia puesto que existe una desinformación de la ciudadanía respecto de la criminalidad de nuestro país.

Por otro lado, carece de valor también que sea el legislador quien se pone al servicio de las demandas sociales, puesto que no manejan datos reales de la situación. Por lo tanto, El Estado debería utilizar mecanismos al servicio de la ciudadanía para que de forma veraz estén informados y no utilizar el populismo punitivo.

CUARTA. Se trata de una pena excepcionalísima, por lo que los supuestos deberían ser muy limitados, ya que en nuestro país, a diferencia de Europa, se contemplan penas muy largas de duración, siendo la máxima de hasta 40 años. En estos casos, incluso la sanción podría llegar a ser mayor que la impuesta a un condenado a pena de prisión permanente revisable, por lo tanto la proporcionalidad de la pena privativa de libertad entraría en crisis.

QUINTA. Queda acreditado que la pena de prisión permanente revisable es una pena conflictiva que entra en colisión con los principios constitucionales vinculados entre sí de humanidad de las penas y dignidad de las personas, reconocidos en los arts. 15 y 10 CE, están en crisis por las condiciones de dureza que se muestran en el ordenamiento Jurídico español. No se respeta el límite recomendado para no afectar el libre desarrollo de la personalidad del condenado ni evitar su aislamiento de su entorno, produciéndose así la prisionización.

SEXTA. El principio de reinserción, observado en el art. 25.2 CE, está en entredicho cuando no se realiza la inversión adecuada para este tipo de reclusos, ya que se ha comprobado que el régimen penitenciario es el mismo. Tampoco es adecuado el régimen de ejecución de la pena, debiendo pasar al menos 8 o 12 años para tener permisos de salida, por lo que el reo está completamente aislado.

Considero que este fin debe seguir siendo el principal y el que se promueva en la política criminal de nuestro país, puesto que su abandono daría lugar a la represión y a la función retributiva de la pena. Por lo tanto, la pena privativa de libertad solamente serviría para deshacernos de la sociedad de personas, no tratándolas como tal, por el hecho de haber delinquido.

SÉPTIMA. Son criticables los parámetros utilizados para decidir la aptitud para la puesta en libertad y reintegración en la sociedad, ya que se incluyen circunstancias del delito o antecedentes penales que han sido valorados en la determinación de la pena. En este caso creo que estaríamos comprometiendo el principio que rige el ordenamiento Jurídico penal básico como el principio *non bis in idem*, por el cual no se puede sancionar en la misma persona el mismo hecho delictivo varias veces. Por tanto, estos criterios no deberían de influir en si el condenado ha adquirido las habilidades suficientes para reinsertarse en la sociedad.

OCTAVA. El principio de legalidad, contemplado en el 25.1 CE, el cual debe regir en un Estado de Derecho como el nuestro y más en relación al poder punitivo del Estado, está mermado en la regulación de la pena de prisión permanente revisable. Las garantías de certeza, taxatividad y determinación de la pena no rigen al completo debido a que no se fijan los límites máximos de la pena y quedando sujeto al examen del Tribunal, que como hemos expuesto anteriormente se rige por unos criterios poco objetivos.

NOVENA. Además, considero que la pena de prisión permanente revisable es una pena injustificada e innecesaria dentro de nuestro Derecho. Se debe, en primer lugar, porque el fundamento de su creación no ha sido eficaz en ninguno de sus argumentos como ya hemos expuesto. En segundo lugar, tampoco se ha conseguido disminuir de forma representativa o acabar con la delincuencia, de hecho la tasa de criminalidad tiene una tendencia a la disminución desde antes de la introducción de dicha medida. De tal forma que para conseguir una prevención eficaz de los delitos, y en este caso delitos muy graves, es necesario tener en cuenta también el origen y las causas de la comisión de los hechos delictivos.

DÉCIMA. Se deberían buscar medidas alternativas a la pena de prisión permanente revisable para la reinserción y que no supongan una privación de derechos fundamentales de tal envergadura y que dan lugar a la institucionalización del recluso y, ante todo, que se respete el principio resocializador de nuestro ordenamiento jurídico.

V. BIBIOGRAFÍA

- Bibliografía citada:

ALONSO SANDOVAL, T. “El marco internacional, comparado y español de la pena de cadena perpetua”, Tesis doctoral, *Universidad Carlos III de Madrid*, Getafe, 2015.

CÁMARA ARROYO, S. “Crónica y crítica a la implementación de la prisión permanente revisable en la reforma penal española (2012-2015)”, *Revista Aranzadi Doctrinal* núm. 4/2016. BIB 2016\2016.

CUERDA RIEZU, A. “La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son inconstitucionales en España”, *Atelier. Libros jurídicos*. Barcelona, 2011.

DAUNIS RODRIGUEZ, A. “Prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su incorporación al acervo punitivo español”, *Revista de Derecho y Criminología*, 3ª Época, nº X, 2013.

FERNANDEZ GARCÍA, J. “El proyecto de reforma del código penal de 2013 a debate”, *las penas privativas de libertad en la reforma Gallardón: especial referencia a la prisión permanente revisable*, Ratio Legis, Madrid, 2014.

FERRER GARCÍA. A.M “La reforma del Código penal a debate” *La prisión permanente revisable a revisión*, Cuadernos penales José María Lidón, Deustodigital, Núm. 12, 2016.

JUNATEY DORADO, C. “Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable”, *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, tomo 65, 2012.

LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A; PÉREZ MANZANO, MA; ALCÁCER GUIRAO, R; ARROYO ZAPATERO, L; DE LEÓN VILLALBA J. & MARTÍNEZ GARAY, L. “Dictamen sobre la Constitucionalidad de la prisión permanente revisable” *Contra la cadena perpetua*. Colección de estudios penales Marino Barbero Santos, nº 16, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016.

MUÑOZ CUESTA. J “La prisión permanente revisable: una pena objeto de polémica social”, *Actualidad Jurídica Aranzadi* núm. 938/2018, 2018.

NISTAL BURÓN. J “La medida de seguridad derivada de una pena de «prisión permanente revisable». La duración de la misma como parte de la garantía ejecutiva” *Revista Aranzadi Doctrinal* num.7/2013, 2013.

PALOMO DEL ARCO. A “la pena de prisión permanente revisable. Una pena innecesaria” *Ministerio fiscal, ponencia*, 2016.

PASCUAL MATELLÁN, L. “La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado”, *CLIVATGE. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials*, nº3, 2015.

PEDROLI SERRETTI, A “Derecho penal del enemigo: análisis de un modelo político-criminal”, Tesis Doctoral *Universidades de Salamanca y Salerno*, 2017.

PINEDO ELIZONDO, L. “La prisión permanente revisable en España” TFM *Universidad de Alcalá de Henares*, 2017.

RÍOS MARTÍN, J.C. “La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad”, *Eds Gakoa*, 2013.

ROIG TORRES. M “Coste de la prisión versus eficacia preventiva. ¿Está justificada la prisión indefinida?” XVII *Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal: Análisis económico del Derecho y Derecho penal*, Universidad de León, 2016.

ROIG TORRES, M. “La cadena perpetua en el Derecho Alemán y Británico. La prisión permanente revisable”, *Iustel*, 2016.

RUBIO LARA. P.A, “Prisión permanente revisable. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de constitucionalidad”. *Aranzadi doctrinal* nº 3/2016, 2016.

SÁNCHEZ ROBERT, M.J, “La prisión permanente revisable en las legislaciones española y alemana”, *Revista Universidad de Murcia. Anales de Derecho*, 2016.

SAUTNER, L. “La prisión perpetua en Austria: significado en el sistema penal y valoración constitucional y político-criminal”, *Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma de 2015*, Dykinson, Madrid, 2016.

SERRANO TÁRRAGA, M.D. “La prisión perpetua revisable” *Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid*, nº 25, Madrid, 2012.

TAMARIT SUMALLA, J.M “la prisión permanente revisable”. *Grandes Tratados. Comentario a la reforma penal de 2015*. Aranzadi, 2015.

- **Legislación:**

Código de Procedimiento Penal francés (Code de procédure pénale)

Código Penal alemán (StGB)

Código Penal austriaco (StGB)

Código Penal español de 1822

Código Penal español de 1848

Código Penal español de 1870

Código Penal español de 1928

Código Penal español de 1932

Código Penal español de 1944

Código Penal español de 1973

Código Penal español de 1995

Código Penal francés (Code Penal)

Código Penal italiano (Codice Penale)

Constitución Española de 1978.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.

Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre de 1979, General Penitenciaria.

Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

- **Jurisprudencia:**

STC 19/1988, de 20 de abril.

STC 112/1996, de 24 de junio.

STC 160/2012, de 20 de septiembre.

- **Recursos electrónicos:**

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada: <http://cejfe.gencat.cat/ca/inici>

Centro de investigaciones sociológicas:
<http://www.cis.es/cis/opencms/ES/busqueda.html>

Comisión Europea, crime statistics. <http://ec.europa.eu/eurostat>

Departamento de Seguridad Nacional: <http://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/departamento-seguridad-nacional>

Ministerio de Justicia: <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio>

Ministerio del Interior: <http://www.interior.gob.es/>

Secretaría general de Instituciones Penitenciarias:
<http://www.institucionpenitenciaria.es/>

ANEXO I

GRÁFICOS DEL CAPITULO III, APARTADO 3.2: ESTUDIO DE LAS TASAS DE CRIMINALIDAD Y DURACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE LARGA DURACIÓN EN EUROPA

Gráfico 1: Tasa de homicidios en la UE de 2014. Fuente el Ministerio del Interior.

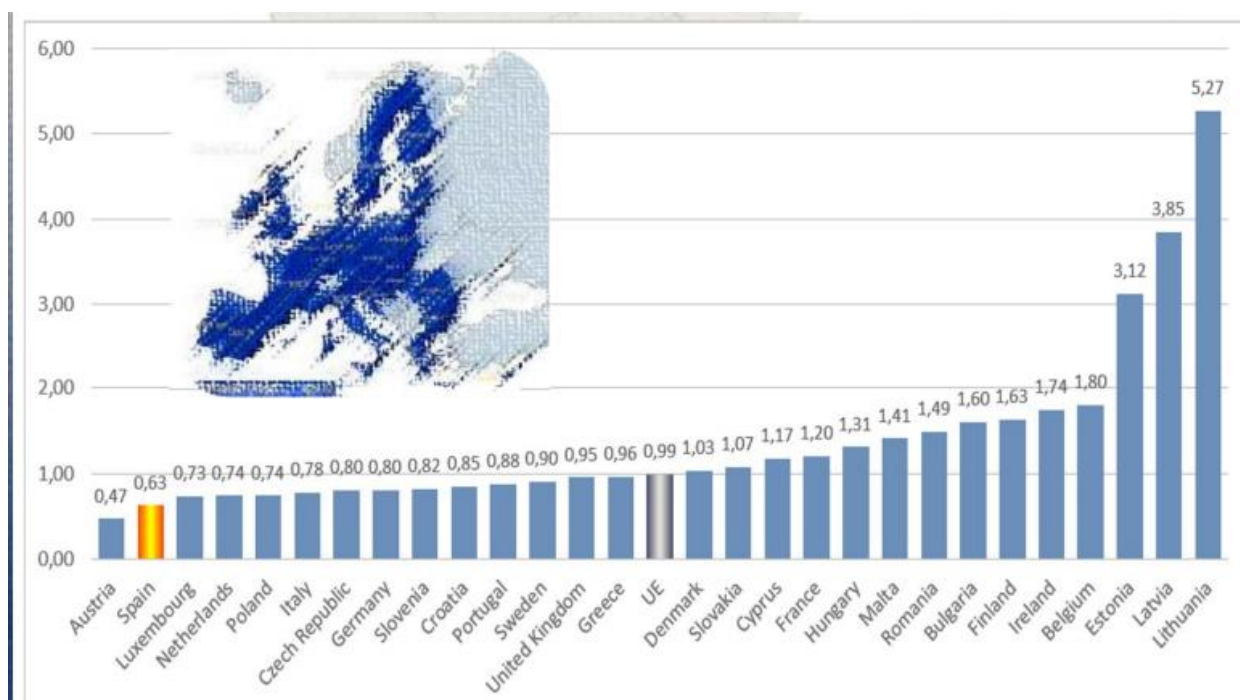


Gráfico 2: Tasa de criminalidad de España. Fuente: Departamento de Seguridad, Gobierno de España

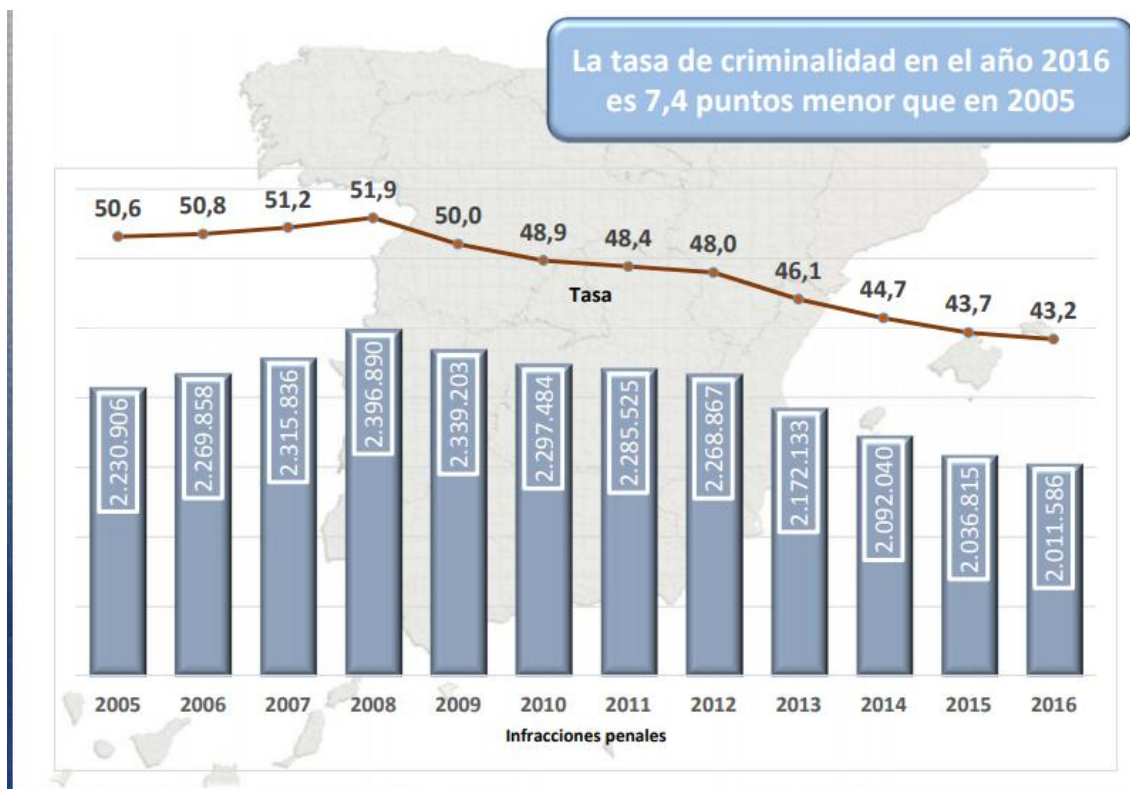


Gráfico 3: Población reclusa, 2002-2012. Fuente: European statistics (Eurostat)

	Number												Index (2007 = 100)				
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
EU-28	593 684	600 233	610 869	620 766	602 810	609 978	624 565	639 460	643 175	646 221		102	105	105	106		
Belgium ⁽¹⁾	8 605	9 308	9 249	9 330	9 573	9 950	9 804	10 105	10 968	11 065	11 212	99	102	110	111	113	
Bulgaria	9 607	10 056	10 935	11 399	11 452	10 792	9 922	9 167	9 429	9 885	9 904	92	85	87	92	92	
Czech Republic	16 597	17 180	18 303	19 003	18 904	19 110	20 471	22 021	21 987	23 062	23 112	107	115	115	121	121	
Denmark	3 435	3 641	3 767	4 041	3 932	3 646	3 530	3 715	3 965	4 037	3 984	97	102	109	111	109	
Germany	75 025	79 183	79 329	79 519	77 166	73 319	73 203	72 043	70 103	69 371	65 722	100	98	96	95	90	
Estonia ⁽¹⁾	4 775	4 352	4 575	4 410	4 310	3 466	3 656	3 555	3 393	3 400	3 286	105	103	98	98	95	
Ireland	3 028	2 986	3 138	3 151	3 191	3 321	3 544	3 275	3 556	3 610	3 789	107	99	107	109	114	
Greece	8 284	8 555	8 760	9 871	10 280	11 255	12 315	11 474	12 590	12 349	12 479	109	102	112	110	111	
Spain	51 882	56 096	59 375	61 054	64 021	67 100	73 558	76 079	73 929	70 472	68 597	110	113	110	105	102	
France	53 463	55 407	59 246	59 197	59 522	60 403	64 003	66 178	66 532	66 975	73 780	106	110	110	111	122	
Croatia	2 641	2 803	3 010	3 485	3 833	4 290	4 734	4 891	5 165	5 064	4 741	110	114	120	118	111	
Italy	55 670	54 237	56 068	59 523	39 005	48 693	58 127	64 791	67 961	66 897	65 701	119	133	140	137	135	
Cyprus	351	355	546	536	599	646	646	670	637	634	694	100	104	99	98	107	
Latvia	8 358	8 222	7 666	6 998	6 636	6 548	6 873	7 055	6 780	6 561	6 117	105	108	104	100	93	
Lithuania	11 345	8 957	7 838	7 951	7 982	7 770	7 736	8 332	8 844	9 526	9 868	100	107	114	123	127	
Luxembourg	391	455	577	735	738	666	674	679	669	632	633	101	102	100	95	95	
Hungary ⁽¹⁾	17 838	16 507	16 543	15 720	14 740	14 743	14 626	15 253	16 328	17 210	17 179	99	103	111	117	117	
Malta	283	278	298	294	375	382	662	494	598	597	585	173	129	157	156	153	
Netherlands	14 137	15 189	17 376	17 860	16 536	15 540	14 610	14 365	14 370	13 970	13 481	94	92	92	90	87	
Austria	7 511	7 816	9 000	8 955	8 780	8 887	7 899	8 423	8 597	8 767	8 756	89	95	97	99	99	
Poland	80 990	80 692	79 344	82 656	87 669	90 199	84 549	85 598	81 094	81 544	84 129	94	95	90	90	93	
Portugal	13 772	13 635	12 956	12 687	12 446	11 587	10 807	11 099	11 613	12 681	13 614	93	96	100	109	117	
Romania	48 081	42 815	39 031	36 700	34 038	29 390	26 212	26 716	28 244	30 694	31 817	89	91	96	104	108	
Slovenia	1 120	1 099	1 126	1 132	1 127	1 336	1 318	1 360	1 351	1 273	1 377	99	102	101	95	103	
Slovakia ⁽¹⁾	7 849	8 829	9 504	9 289	8 657	8 235	8 313	9 033	10 068	10 713	11 075	101	110	122	130	134	
Finland	3 469	3 463	3 535	3 883	3 477	3 370	3 457	3 231	3 189	3 261	3 196	103	96	95	97	95	
Sweden	6 478	6 726	7 291	7 016	7 151	6 740	6 806	6 976	6 891	6 716	6 413	101	104	102	100	95	
United Kingdom:																	
England and Wales	71 218	73 657	74 488	76 190	77 982	79 734	83 194	83 454	85 002	85 374	86 048	104	105	107	107	108	
Scotland ⁽¹⁾	6 452	6 606	6 776	6 856	7 187	7 376	7 826	7 963	7 853	8 178		106	108	106	111		
Northern Ireland	1 029	1 128	1 219	1 325	1 501	1 484	1 490	1 465	1 469	1 703	1 742	100	99	99	115	117	

Gráfico 4: Tabla comparativa de población reclusa promedio anual, 2007-2009 y 2010-2012 (por 100.000 habitantes). Fuente: Eurostat

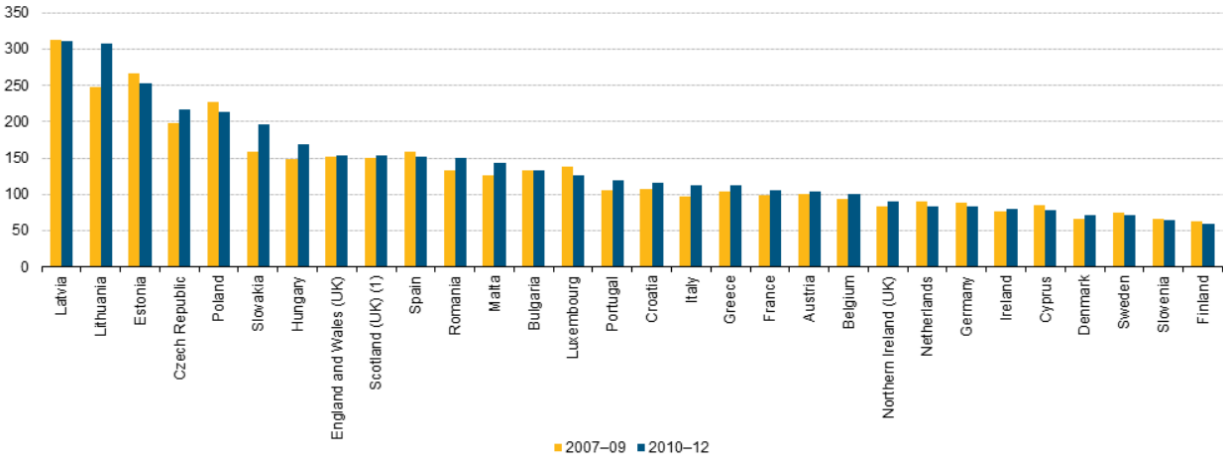


Gráfico 5: Tasas de población reclusa 2015. Fuente: instituciones penitenciarias.

POBLACION RECLUSA SEGUN SITUACION PROCESAL-PENAL, POR SEXO.			
Situacion	Hombres	Mujeres	Total
Preventivos	7.782	762	8.544
Penados	51.034	4.152	55.186
Medidas de Seguridad	572	28	600
Penados con Preventivas	673	36	709
Totales	60.061	4.978	65.039

Gráfico 6: Tasas de población reclusa 2018. Fuente: instituciones penitenciarias

POBLACIÓN RECLUSA SEGÚN SITUACIÓN PROCESAL-PENAL, POR SEXO.

Situacion	Hombres	Mujeres	Total
Preventivos	7.809	668	8.477
Penados	45.656	3.637	49.293
Medidas de Seguridad	565	33	598
Penados con Preventivas	723	30	753
Totales	54.753	4.368	59.121

Gráfico 7: tabla comparativa de la tasa de reincidencia 2014 con estudios anteriores.

Fuente: CEFJE.

Excarcelados año 1997	Excarcelados año 2002	Excarcelados año 2010
Tasa 2002	Tasa 2008	Tasa 2014
37,4%	40,3%	30,2%